

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

**INE/CG687/2022**

**PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO**  
**EXPEDIENTE:**  
UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020  
**DENUNCIANTE:** ALONDRA GUADALUPE  
SÁNCHEZ CHÁVEZ Y OTROS  
**DENUNCIADO:** PARTIDO REVOLUCIONARIO  
INSTITUCIONAL

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ALONDRA GUADALUPE SÁNCHEZ CHÁVEZ Y OTRAS PERSONAS, A TRAVÉS DE LAS CUALES HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS POSIBLEMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, QUIEN SUPUESTAMENTE USÓ PARA TAL EFECTO, SIN CONSENTIMIENTO ALGUNO, SUS DATOS PERSONALES**

Ciudad de México, 19 de octubre de dos mil veintidós.

**G L O S A R I O**

<b><i>COFIPE</i></b>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.
<b><i>Comisión</i></b>	La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<b><i>Consejo General</i></b>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<b><i>Constitución</i></b>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

<b>DEPPP</b>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<b>Instituto o INE</b>	Instituto Nacional Electoral
<b>Ley de Medios</b>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<b>Ley de Partidos</b>	Ley General de Partidos Políticos
<b>LGIPE</b>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<b>PRI o denunciado</b>	Partido Revolucionario Institucional
<b>quejosos o denunciantes</b>	Alondra Guadalupe Sánchez Chávez, Angélica Olguín Martínez, Araceli Chávez Galindo, Carlos Hernández Trejo, Carlos Primero Yeso, Citlally Hernández Lozano, Cristina Martínez Trejo, Delia Hernández Acosta, Dennis Vaquero Campos, Dulce Elena Pérez Hinojosa, Elizabeth Serrano Trejo, Enrique Ramírez Escobar, Felix Rogelio Osorio Ángeles, Gerardo Rodríguez Arangure, Ivonne Vázquez Tepetate, Juan José Reséndiz Barrera, Lizeth Peña Cruz, Mara Argelia Chávez Acosta, María del Carmen Martínez Castaño, Mariana Espino Castañón, Mauricio Israel Rodríguez Nacaspaca, Nancy Griselda Mendoza Corona, Nelly Rodríguez Juárez, Oralia García Morán, Raquel Sanpedro Rangel, Susana Torres Urbano, Teresa Lovatón Mendoza, Yazmín García Zúñiga, Yeimi Yudho González y Yeni Laura Pérez Castro.
<b>Reglamento de Quejas</b>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<b>Sala Superior</b>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<b>Unidad Técnica o UTCE</b>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

## R E S U L T A N D O

**I. ACUERDO INE/CG33/2019<sup>1</sup>.** El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General*, aprobó el acuerdo **INE/CG33/2019**, por el cual se determinó la implementación, de manera excepcional, de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales, en el que se acordó la suspensión de la resolución de

<sup>1</sup> Consultable en <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101664/> CG1ex201901-23-ap-14.pdf

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

diversos procedimientos sancionadores ordinarios, relacionados con presuntas indebidas afiliaciones de ciudadanos de todos los partidos políticos.

En este sentido, en el punto de acuerdo TERCERO del citado acuerdo, se determinó lo siguiente:

**TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciaciones que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.**

**[Énfasis añadido]**

Asimismo, se precisó que los procedimientos sancionadores ordinarios cuya suspensión pudiera generar la caducidad de la potestad sancionadora por parte de esta autoridad, en términos de la jurisprudencia 9/2018, emitida por la Sala Superior, o sobre los cuales recayera una orden expresa de resolución por parte del mencionado órgano jurisdiccional, continuarían con la instrucción ordinaria.

**II. INFORME SOBRE EL ACUERDO INE/CG33/2019.** El veintiuno de febrero de dos mil veinte, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, presentó al Consejo General el Informe Final sobre el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales (**INE/CG33/2019<sup>2</sup>**), mediante el cual, hizo del conocimiento que los siete partidos políticos, entre ellos el *PRI*, durante la vigencia del citado Acuerdo, presentaron los informes respectivos sobre el avance en el agotamiento de las etapas previstas en el acuerdo **INE/CG33/2019**.

**III. DENUNCIAS.** Mediante oficio INE/HGO/JDE02/VE/0296/24-02-2020, de veintisiete de febrero del dos mil veinte, signado por el Vocal Secretario de la 02

---

<sup>2</sup> Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/113621>

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Hidalgo, se hizo del conocimiento a la UTCE sendos escritos de queja<sup>3</sup>, interpuestos por las personas denunciantes en contra del PRI, por presuntamente haber sido indebidamente afiliadas a dicho partido político, haciendo para tal efecto el uso no autorizado de sus datos personales.

Asimismo, además de la afiliación indebida denunciada, María Teresa Lovatón Mendoza también se quejó<sup>4</sup> en contra del PRI, por presuntamente omitir desincorporarla de su padrón de militantes, manteniéndola en sus filas contra su voluntad, ya que supuestamente renunció al mismo en el año dos mil doce; sin embargo, no acompañó a su ocurso ningún elemento que apoyara la veracidad de dicha solicitud.

**IV. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y DE EMPLAZAMIENTO, DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y BAJA DE LOS QUEJOSOS DEL PADRON DE MILITANTES DEL PRI.** Mediante acuerdo de tres de marzo de dos mil veinte<sup>5</sup> la UTCE determinó, entre otras cuestiones, registrar las quejas mencionadas bajo el número de expediente citado al rubro; reservar tanto su admisión a trámite como el emplazamiento hasta contar con mayores elementos para determinar la existencia de las infracciones denunciadas y la probabilidad de que el *PRI* las haya cometido. Asimismo, se requirió al *PRI* y a la *DEPPP*, a efecto de que señalaran si las personas quejosas fueron afiliadas al denunciado, la fecha de afiliación respectiva y, en el caso del *PRI*, las cédulas de afiliación correspondientes. Del mismo modo, se ordenó la baja de los denunciantes del padrón de militantes del citado denunciado.

**V. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO FORMULADO AL PRI.** Mediante oficio PRI/REP-INE/263/2020, de diez de marzo de dos mil veinte,<sup>6</sup> el denunciado dio cumplimiento al requerimiento de información formulado por la *UTCE*, precisando que las personas quejosas si fueron sus afiliados, sin embargo, en cumplimiento al

---

<sup>3</sup> Visible a fojas 1 a 126 del expediente

<sup>4</sup> Visible a fojas 111 a 114 del expediente

<sup>5</sup> Visible a fojas 127 a 137 del expediente

<sup>6</sup> Visible a fojas 149 a 185 del expediente.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

acuerdo **INE/CG33/2019** y a lo ordenado por la Unidad Técnica, las dio de baja de su padrón de militantes.

**VI. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO FORMULADO A LA DEPPP.** Mediante correo electrónico institucional de once de marzo de dos mil veinte,<sup>7</sup> el Titular de la *DEPPP*, informó que las personas quejasas si fueron afiliadas al partido político denunciado en distintas fechas; sin embargo, fueron dadas de baja durante la vigencia del acuerdo INE/CG33/2019, salvo el caso de Nancy Grisela Mendoza Corona, quien fue dada de baja de dicha base, el cuatro de marzo de dos mil veinte.

**VII. SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES.** El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva del *INE* emitió el Acuerdo **INE/JGE34/2020**, por el que ***SE DETERMINAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19***, en cuyo punto ***Octavo*** se determinó lo siguiente:

**“A partir de esta fecha y hasta el 19 de abril, no correrán plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos de este Instituto, con excepción de aquellos vinculados directamente con los procesos electorales en curso o de urgente resolución”.**

***[Énfasis añadido]***

Posteriormente, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, este *Consejo General* emitió el Acuerdo **INE/CG82/2020**, denominado ***ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19***, en el que, entre otras medidas, se estableció la siguiente:

***“Primero.*** Se aprueba como medida extraordinaria la suspensión de los plazos y términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral enunciadas en el anexo único de este Acuerdo, hasta que se contenga la pandemia de coronavirus,

---

<sup>7</sup> Visible a fojas 186 a 188 del expediente.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

*Covid-19, para lo cual este Consejo General dictará las determinaciones conducentes a fin de reanudar las actividades y retomar los trabajos inherentes al ejercicio de sus atribuciones.<sup>8</sup>*

Finalmente, con el propósito de dar continuidad a las anteriores determinaciones, el dieciséis de abril de dos mil veinte, la Junta General Ejecutiva de este Instituto, emitió el Acuerdo **INE/JGE45/2020**, de rubro **ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO INE/JGE34/2020, POR EL QUE SE DETERMINARON MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, A EFECTO DE AMPLIAR LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS**, mediante el cual, con base en la información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con el avance de los efectos negativos de la pandemia en nuestro país, se aprobó la ampliación de la suspensión de los plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos del *INE*, así como cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que dicho órgano colegiado acordara su reanudación.

Cabe mencionar, que las anteriores determinaciones no resultan ser un obstáculo legal para que, en el presente caso, durante este periodo de contingencia la Comisión pueda válidamente sesionar y, en su caso, aprobar el presente proyecto para su posterior conocimiento y resolución, en cuanto existan las condiciones para hacerlo, por parte del *Consejo General*.

Esto es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, párrafos 1 y 2 de la *LGIPE*, la *Comisión*, así como las otras tantas comisiones que integran a este Instituto, se erigen como instancias internas de apoyo que contribuyen al desempeño de las atribuciones del propio *Consejo General* y, en ese sentido, la determinación que asuma ese ente, respecto a la aprobación o no del proyecto que le es sometido a consideración por parte de la *UTCE*, no transgrede ni vulnera ningún derecho o garantía procesal de las partes involucradas.

---

<sup>8</sup> En dicho Anexo se menciona lo relacionado con el trámite y sustanciación de diversos procedimientos ordinarios sancionadores.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 469 de la *LGIFE*, **concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la UTCE pondrá el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en un plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga.**

De lo anterior, se sigue que la remisión del anteproyecto de resolución por parte de la *UTCE* a la *Comisión*, se lleva a cabo como un acto intraprocesal más una vez concluida la investigación, para que las personas integrantes de la *Comisión* determinen si la investigación está suficientemente realizada o si es necesario continuar con la misma, de donde pasará como proyecto a *Consejo* en donde se resolverá por la votación de sus integrantes dando fin al procedimiento. Es decir, la etapa de remisión de la propuesta de resolución a los integrantes de la *Comisión* se da una vez cerrada la instrucción del procedimiento, de modo que, hasta el momento en que se resuelva por el *Consejo General*, ya no existen fases procesales pendientes que deban hacerse del conocimiento a darle intervención a las partes.

Con ello, se concluye que la suspensión a que se refieren los acuerdos citados en el presente resultando, no impactan ni merman las labores que pueda realizar la *Comisión* aún en este periodo de suspensión, toda vez que su labor en este periodo, se lleva a cabo con el propósito de avanzar con los trabajos de revisión de los proyectos propuestos por la *UTCE*, para su posterior aprobación por parte del *Consejo General*, quien es la única instancia que tiene la potestad de resolver los procedimientos ordinarios sancionadores como el que nos ocupa, de conformidad con lo establecido en párrafo 5, del multicitado artículo 469 de la *LGIFE*.

**VIII. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.** El diecinueve de junio de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo INE/CG139/2020 por el que se implementó como medida extraordinaria y temporal la notificación por correo electrónico para comunicar las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores ordinarios.

**IX. DESIGNACIÓN DE NUEVAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES.** El veintidós de julio de dos mil veinte, la Cámara de Diputados designó por mayoría de votos a los Consejeros Electorales Mtra. Norma Irene De la

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Cruz Magaña, Dr. Uuc- Kib Espadas Ancona, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan.

**X. INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES.** El treinta de julio de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General, fue aprobado el Acuerdo **INE/CG172/2020** denominado **ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES, TEMPORALES Y OTROS ÓRGANOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL** en el que, entre otras cuestiones, se determinó la integración y presidencia de la Comisión de Quejas.

**XI. REACTIVACIÓN DE PLAZOS.** El veintiséis de agosto de dos mil veinte, fue aprobado en sesión extraordinaria de este Consejo General, el diverso **INE/CG238/2020** denominado **ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS EN LA INVESTIGACIÓN, INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y DE FISCALIZACIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19.**

En el que se determinó, en lo conducente, lo siguiente:

*Primero. Se reanudan los plazos y términos en la investigación, instrucción, resolución y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización, bajo modalidad a distancia o semipresencial, y conforme a los términos de este Acuerdo.*

En este sentido, mediante acuerdo uno de septiembre de dos mil veinte,<sup>9</sup> la Unidad Técnica reactivó los plazos en el presente procedimiento.

**XII. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.** Mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinte<sup>10</sup> se requirió a Teresa Lovatón Mendoza a efecto de que exhibiera

---

<sup>9</sup> Visible a fojas 189 a 194 del expediente.

<sup>10</sup> Visible a fojas 186 a 200 del expediente.



**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

el acuse original de la constancia mediante la cual, según su dicho, solicitó su baja del padrón de afiliados al *PRI*, apercibida, en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado dentro del lapso otorgado, se tendría por no interpuesta su queja en lo referente a la omisión de darla de baja del padrón de militantes del *PRI*.

Asimismo, derivado de lo informado tanto por el denunciado como por la *DEPPP*, se ordenó inspeccionar el sitio web del *PRI* para verificar que los quejosos, efectivamente, fueron dados de baja del padrón de militantes del denunciado y de sus plataformas públicas.

**XIII. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.** Mediante oficio PRI/REP-INE/757/2020<sup>11</sup>, el *PRI* aportó el original de la cédula de afiliación de Nancy Griselda Mendoza Corona.

**XIV. VISTA A LA QUEJOSA.** Mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno<sup>12</sup> se dio vista a Nancy Griselda Mendoza Corona con el original de la cédula de afiliación a efecto de que realizara las manifestaciones pertinentes. Dicha quejosa fue notificada<sup>13</sup> personalmente el veintidos de febrero del mismo año.

Asimismo se requirió a la 02 Junta Distrital Electoral de este Instituto en el estado de Hidalgo, a efecto de que notificara a la quejosa Teresa Lovatón Mendoza, el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinte referente a la solicitud de baja del padrón de militantes del *PRI*. Dicha quejosa fue notificada<sup>14</sup> personalmente el veintiséis de febrero de la misma anualidad.

Del mismo modo, mediante correo electrónico de veintinueve de abril de dos mil veintiuno<sup>15</sup>, el auxiliar jurídico de la 02 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Hidalgo informó que las quejas referidas no presentaron algún escrito con relación a la vista y al requerimiento formulados por esta Unidad Técnica.

---

<sup>11</sup> Visible a fojas 205 a 207 del expediente.

<sup>12</sup> Visible a fojas 208 a 213 del expediente.

<sup>13</sup> Visible a fojas 219 a 221 del expediente.

<sup>14</sup> Visible a fojas 223 a 225 del expediente.

<sup>15</sup> Visible a foja 226 del expediente

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

**XV. ACUERDO DE QUEJA NO INTERPUESTA, ADMISIÓN, EMPLAZAMIENTO E INSPECCIÓN AL SITIO WEB DEL PRI.** Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno<sup>16</sup>, la Unidad Técnica hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y tuvo por no interpuesta la queja de Teresa Lovatón Mendoza únicamente por cuanto hace a la supuesta omisión del *PRI* de darla de baja de su padrón de militantes, pese haberla solicitado la denunciante.

Asimismo, se admitieron a trámite las quejas restantes y ordenó emplazar al *PRI*, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y, en su caso, aportara las pruebas que considerara pertinentes, corriéndosele traslado con copia simple de las constancias que, hasta esa etapa procesal, integraban el presente expediente.

Dicho proveído se notificó de la siguiente manera:

Fecha de notificación	Contestación	Síntesis de la respuesta del denunciado
Citatorio. 21/05/2021 <sup>17</sup>  Cédula. 24/05/2021 <sup>18</sup>	<i>PRI</i> /REP- INE/410/2021 <sup>19</sup>	Que las quejas que dieron lugar al presente procedimiento carecen de pruebas para demostrar la ilicitud de las afiliaciones cuestionadas, ya que únicamente se sustentan en el dicho de los quejosos.  No obstante, en términos del acuerdo INE/CG33/2019, para garantizar el derecho de libre afiliación, se atendió puntualmente su solicitud de baja, cancelándolos del padrón de militantes respectivo.  Asimismo ofreció la documental privada consistente en el original de la cédula de afiliación de Nancy Griselda Mendoza Corona; la instrumental de actuaciones; y la presuncional en su doble aspecto legal y humana.

<sup>16</sup> Visible a fojas 227 a 236 del expediente.

<sup>17</sup> Visible a foja 240 del expediente.

<sup>18</sup> Visible a fojas 241 a 244 del expediente.

<sup>19</sup> Visible a fojas 245 a 248 del expediente.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Del mismo modo, con el propósito de constatar que las personas quejasas ya no se encontraban afiliadas al denunciado, se ordenó inspeccionar el sitio web del *PRI*.

**XVI. ACUERDO DE ALEGATOS.** Mediante proveído de veintiocho de julio del año próximo pasado<sup>20</sup> para garantizar el principio de contradicción de las partes, la *UTCE* puso los autos a la vista de las partes para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera. Dicho acuerdo se diligenció en los siguientes términos:

Sujeto notificado	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Fecha de contestación y alegatos
<i>PRI</i>	02/08/2021 <sup>21</sup>  Se entendió con personal de la representación y se notificó por estrados.	Del 03 al 09 de agosto de 2021 <sup>22</sup>	Oficio PRI/REP-INE/498/202 <sup>23</sup> de 06 de agosto de 2021.  Reprodujo lo manifestado en la contestación al emplazamiento.
Alondra Guadalupe Sánchez Chávez	04/08/2021 <sup>24</sup> Se entendió con la quejosa	05 al 11 de agosto de 2021 <sup>25</sup>	No contestó
Angélica Olguín Martínez	09/08/2021 <sup>26</sup> Se entendió con la quejosa	10 al 16 de agosto de 2021 <sup>27</sup>	No contestó
Araceli Chávez Galindo	10/08/2021 <sup>28</sup>	11 al 17 de agosto de 2021 <sup>29</sup>	No contestó

<sup>20</sup> Visible a fojas 249 a 253 del expediente

<sup>21</sup> Visible a fojas 266 a 271 del expediente

<sup>22</sup> Sin contar sábado 7 y domingo 8 de agosto de 2021, por ser inhábiles.

<sup>23</sup> Visible a fojas 272 a 275 del expediente

<sup>24</sup> Visible a fojas 280 a 283 del expediente

<sup>25</sup> Sin contar el sábado 7 y domingo 8 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>26</sup> Visible a fojas 284 a 287 del expediente

<sup>27</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>28</sup> Visible a fojas 336 a 339 del expediente

<sup>29</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

<b>Sujeto notificado</b>	<b>Fecha de notificación</b>	<b>Plazo para formular alegatos</b>	<b>Fecha de contestación y alegatos</b>
	Se entendió con la quejosa		
Carlos Hernández Trejo	10/08/2021 <sup>30</sup> Se entendió con el quejoso	11 al 17 de agosto de 2021 <sup>31</sup>	No contestó
Carlos Primero Yeso	13/08/2021 <sup>32</sup> Se entendió con el quejoso	16 al 20 de agosto de 2021 <sup>33</sup>	No contestó
Citlally Hernández Lozano	11/08/2021 <sup>34</sup> Se entendió con la quejosa	12 al 18 de agosto de 2021 <sup>35</sup>	No contestó
Cristina Martínez Trejo	11/08/2021 <sup>36</sup> Se entendió con la quejosa	12 al 18 de agosto de 2021 <sup>37</sup>	No contestó
Delia Hernández Acosta	11/08/2021 <sup>38</sup> Se entendió con la quejosa	12 al 18 de agosto de 2021 <sup>39</sup>	No contestó
Dennis Vaquero Campos	09/08/2021 <sup>40</sup> Se entendió con la quejosa	10 al 16 de agosto de 2021 <sup>41</sup>	No contestó
Dulce Elena Pérez Hinojosa	12/08/2021 <sup>42</sup>	13 al 19 de agosto de 2021 <sup>43</sup>	No contestó

<sup>30</sup> Visible a fojas 343 a 347 del expediente

<sup>31</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>32</sup> Visible a fojas 288 a 291 del expediente

<sup>33</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>34</sup> Visible a fojas 292 a 295 del expediente

<sup>35</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>36</sup> Visible a fojas 296 a 299 del expediente

<sup>37</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>38</sup> Visible a fojas 300 a 303 del expediente

<sup>39</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>40</sup> Visible a foja 348 del expediente

<sup>41</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>42</sup> Visible a fojas 384 a 387 del expediente

<sup>43</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Sujeto notificado	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Fecha de contestación y alegatos
	Se entendió con la quejosa		
Elizabeth Serrano Trejo	13/08/2021 <sup>44</sup> Se entendió con la quejosa	16 al 20 de agosto de 2021 <sup>45</sup>	No contestó
Enrique Ramírez Escobar	18/08/2021 <sup>46</sup> Se entendió con el quejoso	19 al 25 de abril de 2022 <sup>47</sup>	No contestó
Félix Rogelio Osorio Ángeles	11/08/2021 <sup>48</sup> Se entendió con el quejoso	12 al 18 de agosto de 2021 <sup>49</sup>	No contestó
Gerardo Rodríguez Arangure	13/08/2021 <sup>50</sup> Se entendió con el quejoso	16 al 20 de agosto de 2021 <sup>51</sup>	No contestó
Ivonne Vázquez Tepetate	16/08/2021 <sup>52</sup> Se entendió con la quejosa	17 al 23 de abril de 2022 <sup>53</sup>	No contestó
Juan José Reséndiz Barrera	10/08/2021 <sup>54</sup> Se entendió con el quejoso	11 al 17 de agosto de 2021 <sup>55</sup>	No contestó
Lizeth Peña Cruz	13/08/2021 <sup>56</sup>	16 al 20 de agosto de 2021 <sup>57</sup>	No contestó

<sup>44</sup> Visible a fojas 304 a 307 del expediente

<sup>45</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>46</sup> Visible a fojas 388 a 391 del expediente

<sup>47</sup> Sin contar el sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>48</sup> Visible a fojas 308 a 311 del expediente

<sup>49</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>50</sup> Visible a fojas 392 a 395 del expediente

<sup>51</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>52</sup> Visible a fojas 312 a 315 del expediente

<sup>53</sup> Sin contar el sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>54</sup> Visible a fojas 316 a 319 del expediente

<sup>55</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>56</sup> Visible a fojas 351 a 354 del expediente

<sup>57</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

<b>Sujeto notificado</b>	<b>Fecha de notificación</b>	<b>Plazo para formular alegatos</b>	<b>Fecha de contestación y alegatos</b>
	Se entendió con la quejosa		
Mara Argelia Chávez Acosta	13/08/2021 <sup>58</sup> Se entendió con la quejosa	16 al 20 de agosto de 2021 <sup>59</sup>	No contestó
María del Carmen Martínez Castaño	09/08/2021 <sup>60</sup> Se entendió con la quejosa	10 al 16 de agosto de 2021 <sup>61</sup>	No contestó
Mariana Espino Castañón	18/08/2021 <sup>62</sup> Se entendió con la quejosa	19 al 25 de abril de 2022 <sup>63</sup>	No contestó
Mauricio Israel Rodríguez Nacaspaca	19/08/2021 <sup>64</sup> Se entendió con la quejosa	20 al 26 de abril de 2022 <sup>65</sup>	No contestó
Nancy Grisel Mendoza Corona	20/08/2021 <sup>66</sup> Se entendió con la quejosa	23 al 27 de abril de 2022 <sup>67</sup>	No contestó
Nelly Rodríguez Juárez	16/08/2021 <sup>68</sup> Se entendió con la quejosa	17 al 23 de abril de 2022 <sup>69</sup>	No contestó
Oralia García Morán	12/08/2021 <sup>70</sup>	13 al 19 de agosto de 2021 <sup>71</sup>	No contestó

<sup>58</sup> Visible a fojas 320 a 323 del expediente

<sup>59</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>60</sup> Visible a fojas 355 a 358 del expediente

<sup>61</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>62</sup> Visible a fojas 359 a 362 del expediente

<sup>63</sup> Sin contar el sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>64</sup> Visible a fojas 324 a 327 del expediente

<sup>65</sup> Sin contar el sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>66</sup> Visible a fojas 396 a 399 del expediente

<sup>67</sup> Sin contar el sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>68</sup> Visible a fojas 486 a 389 del expediente

<sup>69</sup> Sin contar el sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>70</sup> Visible a fojas 367 a 370 del expediente

<sup>71</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Sujeto notificado	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Fecha de contestación y alegatos
	Se entendió con la quejosa		
Raquel Sanpedro Rangel	13/08/2021 <sup>72</sup> Se entendió con la quejosa	16 al 20 de agosto de 2021 <sup>73</sup>	No contestó
Susana Torres Urbano	13/08/2021 <sup>74</sup> Se entendió con la quejosa	16 al 20 de agosto de 2021 <sup>75</sup>	No contestó
Teresa Lovatón Mendoza	10/08/2021 <sup>76</sup> Se entendió con la quejosa	11 al 17 de agosto de 2021 <sup>77</sup>	No contestó
Yazmín García Zúñiga	13/08/2021 <sup>78</sup> Se entendió con la quejosa	16 al 20 de agosto de 2021 <sup>79</sup>	No contestó
Yeimi Yudho González	12/08/2021 <sup>80</sup> Se entendió con la quejosa	13 al 19 de agosto de 2021 <sup>81</sup>	No contestó
Yeni Laura Pérez Castro	11/08/2021 <sup>82</sup> Se entendió con la quejosa	12 al 18 de agosto de 2021 <sup>83</sup>	No contestó

**XVII. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.** Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno<sup>84</sup> se ordenó verificar el sitio Web del *PRO* a efecto de

<sup>72</sup> Visible a fojas 328 a 331 del expediente

<sup>73</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>74</sup> Visible a fojas 371 a 374 del expediente

<sup>75</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>76</sup> Visible a fojas 332 a 335 del expediente

<sup>77</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>78</sup> Visible a fojas 375 a 382 del expediente

<sup>79</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>80</sup> Visible a fojas 379 a 370 del expediente

<sup>81</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>82</sup> Visible a fojas 340 a 343 del expediente

<sup>83</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021, por ser inhábiles

<sup>84</sup> Visible a foja 523 a 525 del expediente

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

verificar si efectivamente dio de baja a las personas quejas de su padrón de militantes.

En este sentido mediante acta circunstanciada<sup>85</sup> de la misma data se pudo constatar que las personas quejas, a excepción de Cristina Martínez Trejo, fueron dadas de baja del citado padrón.

**XVIII. REQUERIMIENTO AL PRI.** Mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno<sup>86</sup> se requirió al denunciado a efecto de que manifestar la razón por la cual mantiene como afiliada a Cristina Martínez Trejo, además de precisar los motivos por los cuales afirmó ante esta autoridad haberla dado de baja. Asimismo, se le ordenó darla de baja de su padrón de militantes y de cualquier plataforma pública.

**XIX. DESAHOGO DE REQUERIMIENTO FORMULADO AL PRI.** Mediante oficio PRI/REP-INE/633/2021<sup>87</sup> el denunciado señaló que el 23 de enero de dos mil veinte dio de baja a Cristina Martínez Trejo de su padrón de militantes, agregando la documentación respectiva, precisando la persona que aparece como afiliada de dicho instituto político, acorde al acta circunstanciada de veintisiete de octubre del año próximo pasado, se debe a una homonimia.

**XX. REPOSICIÓN DE ALEGATOS Y VISTA A LA QUEJOSA CRISTINA MARTÍNEZ TREJO.** Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós<sup>88</sup> para garantizar el principio de contradicción de las partes, la *UTCE* puso los autos a la vista de las partes para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera. Además de dar vista a Cristina Martínez Trejo con la documentación aportada por el denunciado respecto de su baja del padrón de militantes respectivo. Dicho acuerdo se diligenció en los siguientes términos:

---

<sup>85</sup> Visible a foja 528 a 539 del expediente

<sup>86</sup> Visible a foja 540 a 544 del expediente

<sup>87</sup> Visible a foja 551 a 557 del expediente

<sup>88</sup> Visible a fojas 558 a 562 del expediente



**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Sujeto notificado	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Fecha de contestación y alegatos
PRI	25/03/2022 <sup>89</sup>	28 de marzo al 1 de abril de 2022 <sup>90</sup>	Oficio PRI/REP-INE/073/2022 <sup>91</sup> de 01 de abril de 2022.  Reprodujo lo manifestado en la contestación al emplazamiento.
Alondra Guadalupe Sánchez Chávez	04/04/2022 <sup>92</sup> Se entendió con la quejosa	05 al 11 de abril de 2022 <sup>93</sup>	No contestó
Angélica Olguín Martínez	04/04/2022 <sup>94</sup> Se entendió con la quejosa	05 al 11 de abril de 2022 <sup>95</sup>	No contestó
Araceli Chávez Galindo	18/04/2022 <sup>96</sup> Se entendió con la quejosa	19 al 25 de abril de 2022 <sup>97</sup>	No contestó
Carlos Hernández Trejo	03/05/2022 <sup>98</sup> Se entendió con la quejosa	04 al 09 de mayo de 2022 <sup>99</sup>	No contestó
Carlos Primero Yeso	04/04/2022 <sup>100</sup> Se entendió con el quejoso	05 al 11 de abril de 2022 <sup>101</sup>	No contestó
Citlally Hernández Lozano	06/04/2022 <sup>102</sup> Se entendió con la quejosa	07 al 13 de abril de 2022 <sup>103</sup>	No contestó

<sup>89</sup> Visible a fojas 565 a 571 del expediente

<sup>90</sup> Sin contar el sábado 26 y domingo 27 de abril de 2022

<sup>91</sup> Visible a fojas 576 a 579 del expediente

<sup>92</sup> Visible a fojas 583 a 586 del expediente

<sup>93</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

<sup>94</sup> Visible a fojas 619 a 621 del expediente

<sup>95</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

<sup>96</sup> Visible a fojas 643 a 645 del expediente

<sup>97</sup> Sin contar el sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022

<sup>98</sup> Visible a fojas 658 a 660 del expediente

<sup>99</sup> Sin contar el sábado 7 y domingo 8 de mayo de 2022

<sup>100</sup> Visible a fojas 586 a 588 del expediente

<sup>101</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

<sup>102</sup> Visible a fojas 631 a 633 del expediente

<sup>103</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

<b>Sujeto notificado</b>	<b>Fecha de notificación</b>	<b>Plazo para formular alegatos</b>	<b>Fecha de contestación y alegatos</b>
Cristina Martínez Trejo	05/04/2022 <sup>104</sup> Se entendió con la quejosa	06 al 12 de abril de 2022 <sup>105</sup>	No contestó
Delia Hernández Acosta	11/05/2022 <sup>106</sup> Se entendió con la quejosa	12 al 18 de mayo de 2022 <sup>107</sup>	No contestó
Dennis Vaquero Campos	22/04/2022 <sup>108</sup> Se entendió con la quejosa	25 al 29 de abril de 2022 <sup>109</sup>	No contestó
Dulce Elena Pérez Hinojosa	04/04/2022 <sup>110</sup> Se entendió con la quejosa	05 al 11 de abril de 2022 <sup>111</sup>	No contestó
Elizabeth Serrano Trejo	04/04/2022 <sup>112</sup> Se notificó con persona autorizada	05 al 11 de abril de 2022 <sup>113</sup>	No contestó
Enrique Ramírez Escobar	04/04/2022 <sup>114</sup> Se entendió con persona autorizada	05 al 11 de abril de 2022 <sup>115</sup>	No contestó
Félix Rogelio Osorio Ángeles	06/04/2022 <sup>116</sup> Se entendió con el quejoso	07 al 13 de abril de 2022 <sup>117</sup>	No contestó
Gerardo Rodríguez Arangure	04/04/2022 <sup>118</sup> Se entendió con el quejoso	05 al 11 de abril de 2022 <sup>119</sup>	No contestó

<sup>104</sup> Visible a fojas 625 a 627 del expediente

<sup>105</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

<sup>106</sup> Visible a fojas 667 a 669 del expediente

<sup>107</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de mayo de 2022

<sup>108</sup> Visible a fojas 649 a 651 del expediente

<sup>109</sup> Sin contar el sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022

<sup>110</sup> Visible a fojas 607 a 609 del expediente

<sup>111</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

<sup>112</sup> Visible a fojas 589 a 591 del expediente

<sup>113</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

<sup>114</sup> Visible a fojas 610 a 612 del expediente

<sup>115</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

<sup>116</sup> Visible a fojas 634 a 636 del expediente

<sup>117</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

<sup>118</sup> Visible a fojas 613 a 615 del expediente

<sup>119</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

<b>Sujeto notificado</b>	<b>Fecha de notificación</b>	<b>Plazo para formular alegatos</b>	<b>Fecha de contestación y alegatos</b>
Ivonne Vázquez Tepetate	12/04/2022 <sup>120</sup> Se entendió con la quejosa	13 al 19 de abril de 2022 <sup>121</sup>	No contestó
Juan José Reséndiz Barrera	18/04/2022 <sup>122</sup> Se entendió con el quejoso	19 al 25 de abril de 2022 <sup>123</sup>	No contestó
Lizeth Peña Cruz	04/04/2022 <sup>124</sup> Se entendió con la quejosa	05 al 11 de abril de 2022 <sup>125</sup>	No contestó
Mara Argelia Chávez Acosta	04/04/2022 <sup>126</sup> Se entendió con la quejosa	05 al 11 de abril de 2022 <sup>127</sup>	No contestó
María del Carmen Martínez Castaño	05/04/2022 <sup>128</sup> Se entendió con la quejosa	06 al 12 de abril de 2022 <sup>129</sup>	No contestó
Mariana Espino Castañón	22/04/2022 <sup>130</sup> Se entendió con la quejosa	25 al 29 de abril de 2022 <sup>131</sup>	No contestó
Mauricio Israel Rodríguez Nacaspaca	27/04/2022 <sup>132</sup> Se entendió con el quejoso	28 de abril al 4 de mayo de 2022 <sup>133</sup>	No contestó
Nancy Griselda Mendoza Corona	04/04/2022 <sup>134</sup> Se entendió con la quejosa	05 al 11 de abril de 2022 <sup>135</sup>	No contestó

<sup>120</sup> Visible a fojas 637 a 639 del expediente

<sup>121</sup> Sin contar el sábado 16 y domingo 17 de abril de 2022

<sup>122</sup> Visible a fojas 640 a 642 del expediente

<sup>123</sup> Sin contar el sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022

<sup>124</sup> Visible a fojas 598 a 600 del expediente

<sup>125</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

<sup>126</sup> Visible a fojas 592 a 594 del expediente

<sup>127</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

<sup>128</sup> Visible a fojas 622 a 624 del expediente

<sup>129</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

<sup>130</sup> Visible a fojas 652 a 654 del expediente

<sup>131</sup> Sin contar el sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022

<sup>132</sup> Visible a fojas 655 a 657 del expediente

<sup>133</sup> Sin contar el sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo de 2022

<sup>134</sup> Visible a fojas 516 a 618 del expediente

<sup>135</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

<b>Sujeto notificado</b>	<b>Fecha de notificación</b>	<b>Plazo para formular alegatos</b>	<b>Fecha de contestación y alegatos</b>
Nelly Rodríguez Juárez	13/04/2022 <sup>136</sup> Se notificó por estrados <b>Imposibilidad de notificación</b>	14 al 20 de abril de 2022 <sup>137</sup>	No contestó
Oralia García Morán	06/05/2022 <sup>138</sup> Se entendió con la quejosa	09 al 13 de mayo de 2022 <sup>139</sup>	No contestó
Raquel Sanpedro Rangel	04/04/2022 <sup>140</sup> Se entendió con la quejosa	05 al 11 de abril de 2022 <sup>141</sup>	No contestó
Susana Torres Urbano	04/04/2022 <sup>142</sup> Se entendió con la quejosa	05 al 11 de abril de 2022 <sup>143</sup>	No contestó
Teresa Lovatón Mendoza	18/04/2022 <sup>144</sup> Se entendió con la quejosa	19 al 25 de abril de 2022 <sup>145</sup>	No contestó
Yazmín García Zúñiga	04/04/2022 <sup>146</sup> Se entendió con la quejosa	05 al 11 de abril de 2022 <sup>147</sup>	No contestó
Yeimi Yudho González	09/05/2022 <sup>148</sup> Se entendió con la quejosa	10 al 16 de mayo de 2022 <sup>149</sup>	No contestó
Yeni Laura Pérez Castro	05/04/2022 <sup>150</sup> Se entendió con la quejosa	06 al 12 de abril de 2022 <sup>151</sup>	No contestó

<sup>136</sup> Visible a fojas 661 a 663 del expediente

<sup>137</sup> Sin contar el sábado 16 y domingo 17 de abril de 2022

<sup>138</sup> Visible a fojas 661 a 663 del expediente

<sup>139</sup> Sin contar el sábado 7 y domingo 8 de mayo de 2022

<sup>140</sup> Visible a fojas 595 a 597 del expediente

<sup>141</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

<sup>142</sup> Visible a fojas 601 a 603 del expediente

<sup>143</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

<sup>144</sup> Visible a fojas 646 a 648 del expediente

<sup>145</sup> Sin contar el sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022

<sup>146</sup> Visible a fojas 604 a 606 del expediente

<sup>147</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

<sup>148</sup> Visible a fojas 664 a 666 del expediente

<sup>149</sup> Sin contar el sábado 14 y domingo 15 de mayo de 2022

<sup>150</sup> Visible a fojas 628 a 630 del expediente

<sup>151</sup> Sin contar el sábado 9 y domingo 10 de abril de 2022

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

**XXI. VERIFICACIÓN DE ESTATUS REGISTRAL.** El veintidós de septiembre de dos mil veintidós, la *Unidad Técnica* realizó una verificación al Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos y corroboró que las personas quejasas fueron dadas de baja del padrón de militantes del *PRI*, sin que hubiesen sido reincorporadas al mismo.

**XXII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO.** En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, para que fuera sometido a la consideración de las integrantes de la *Comisión*.

**XXIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN.** En la Cuarta Sesión Ordinaria de carácter privado, celebrada doce de octubre de dos mil veintidós, la *Comisión*, aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad de votos de sus integrantes y ordenó turnarlo a este Consejo General para su aprobación definitiva, y

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. COMPETENCIA**

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto de análisis en el presente procedimiento sancionador, consiste en la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*, los cuales se encuentran replicados en los numerales 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2; 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), y 29 de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

afiliación de las personas quejasas, utilizando para ello indebidamente sus datos personales, por parte del *PRI*.

Al respecto, es importante tomar en consideración que, conforme al artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *Ley de Partidos*, los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, correspondiendo al *INE* vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*; 442, párrafo 1, inciso a); y 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento jurídico, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo que antecede, infracciones que son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección conocer de las infracciones a la normatividad electoral y, en su caso, imponer las sanciones atinentes, en el particular, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la infracción denunciada, atribuida al *PRI*, consistente, esencialmente, en la presunta violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales de las personas quejasas.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente *SUP-RAP-107/2017*, en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE*, —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366 del COFIPE—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, es decir con base en el derecho humano a la libertad de afiliación en materia política.

**SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO**

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas (indebida afiliación y uso indebido de datos personales) atribuidas al *PRI*, se cometieron en diversas fechas, en las cuales tuvieron vigencia diversos ordenamientos jurídicos, sin perder de vista que todos ellos contienen exactamente las mismas reglas respecto al derecho a la libertad de afiliación a los partidos políticos, como se desarrollará con amplitud más adelante en este mismo instrumento resolutivo.

En efecto, conforme a lo anotado en el apartado de antecedentes de la presente resolución, la Unidad Técnica realizó diversas diligencias a fin de esclarecer la fecha de afiliación de las personas quejas al *PRI*, obteniéndose los resultados que se muestran en la siguiente tabla:

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

<b>No</b>	<b>Nombre del quejoso</b>	<b>Fecha de afiliación DEPPP</b>	<b>Fecha de afiliación PRI<sup>152</sup></b>
1	Alondra Guadalupe Sánchez Chávez	*	No proporcionó fecha, refirió a un <i>registro histórico</i>
2	Angélica Olguín Martínez	*	
3	Araceli Chávez Galindo	*	
4	Carlos Hernández Trejo	24/05/2013	
5	Carlos Primero Yeso	*	
6	Citlally Hernández Lozano	*	
7	Cristina Martínez Trejo	*	
8	Delia Hernández Acosta	*	
9	Dennis Vaquero Campos	03/09/2013	
10	Dulce Elena Pérez Hinojosa	20/05/2016	20/05/2016
11	Elizabeth Serrano Trejo	*	No proporcionó fecha, refirió a un <i>registro histórico</i>
12	Enrique Ramírez Escobar	24/02/2015	
13	Félix Rogelio Osorio Ángeles	*	
14	Gerardo Rodríguez Arangure	05/08/2014	
15	Ivonne Vázquez Tepetate	*	
16	Juan José Reséndiz Barrera	*	
17	Lizeth Peña Cruz	30/04/2014	
18	Mara Argelia Chávez Acosta	*	
19	María del Carmen Martínez Castaño	24/05/2013	
20	Mariana Espino Castañón	23/02/2014	
21	Mauricio Israel Rodríguez Nacaspaca	*	
22	Nancy Grisel Mendoza Corona	28/05/2019	28/05/2019
23	Nelly Rodríguez Juárez	02/01/2012	No proporcionó fecha, refirió a un <i>registro histórico</i>
24	Oralia García Morán	02/01/2014	
25	Raquel Sanpedro Rangel	*	
26	Susana Torres Urbano	02/02/2014	
27	Teresa Lovatón Mendoza	*	08/08/2007
28	Yazmín García Zúñiga	24/05/2013	No proporcionó fecha, refirió a un <i>registro histórico</i>
29	Yeimi Yudho González	02/01/2014	
30	Yeni Laura Pérez Castro	*	

<sup>152</sup> Visible a fojas 149 a 152 del expediente



**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Del análisis de las quejas que motivaron el procedimiento que nos ocupa, se advierte que en los casos de Alondra Guadalupe Sánchez Chávez, Angélica Olguín Martínez, Araceli Chávez Galindo, Carlos Primero Yeso, Citlally Hernández Lozano, Cristina Martínez Trejo, Delia Hernández Acosta, Elizabeth Serrano Trejo, Félix Rogelio Osorio Ángeles, Ivonne Vázquez Tepetate, Juan José Reséndiz Barrera, Mara Argelia Chávez Acosta, Mauricio Israel Rodríguez Nacaspaca, Raquel Sanpedro Rangel, Teresa Lovatón Mendoza y Yeni Laura Pérez Castro, se desconoce la fecha de afiliación toda vez que no fue proporcionada por la *DEPPP*, ya que no era requerida en los registros capturados con anterioridad a la entrada en vigor de los abrogados “*Lineamientos para la verificación del padrón de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro*”, es decir, antes del 13 de septiembre de 2012, en este sentido, en congruencia con los principios constitucionales de certeza y objetividad, en términos del acuerdo INE/CG172/2016, **se tiene como fecha de afiliación el doce de septiembre de dos mil doce**; por lo tanto a dichos casos resulta aplicable el *COFIPE*, en razón de que los hechos que se investigan acontecieron bajo los efectos de la normatividad referida.

Asimismo, por cuanto hace a Carlos Hernández Trejo, Dennis Vaquero Campos, Lizeth Peña Cruz, María del Carmen Martínez Castaño, Mariana Espino Castañón, Nely Rodríguez Juárez, Oralia García Moran, Susana Torres Urbano, Yazmín García Zúñiga e Yeimi Yudho González, se tiene constancia de que la posible afiliación indebida fue realizada **antes de la entrada en vigor de la LGIPE**; por tanto, la conducta atribuida al partido político debe ser analizada bajo la luz de las normas jurídicas vigentes al momento en que sucedieron los hechos presuntamente infractores; esto es, la legislación comicial sustantiva aplicable, será el *COFIPE*, en razón de que los hechos que se investigan se suscitaron bajo el imperio de dicha norma.

Por último, respecto a Dulce Elena Pérez Hinojosa, Enrique Ramírez Escobar, Gerardo Rodríguez Arangure y Nancy Griselda Mendoza Corona, toda vez que fueron afiliados con posterioridad al veintitrés de mayo de dos mil catorce, sus afiliaciones serán analizadas a la luz de la *LGIPE*.

En cuanto a las reglas procedimentales aplicables al presente procedimiento, serán las contenidas en la *LGIPE*, al no contener disposición alguna en perjuicio de las partes.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Lo anterior, tomando en consideración la interpretación sistemática, funcional y armónica de los artículos Tercero y Sexto Transitorios del Decreto por el que se expide la LGIPE, en consonancia con la Jurisprudencia de rubro **RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES**<sup>153</sup>.

**TERCERO. EFECTOS DEL ACUERDO INE/CG33/2019**

Para los efectos de la resolución del asunto que nos ocupa, y con el propósito de conocer las razones que subyacen a la problemática de las indebidas afiliaciones cometidas por los partidos políticos en perjuicio del derecho político electoral de libre afiliación, es necesario mencionar que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General* aprobó el acuerdo INE/CG33/2019, por el que se implementó un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales.

Las razones que motivaron la suscripción del mencionado acuerdo, fueron las siguientes:

- a. La imposición de sanciones económicas que se venían aplicando a los partidos políticos por la transgresión al derecho de libre afiliación política **fue insuficiente para inhibir esta conducta.**
- b. **Los partidos políticos reconocieron la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación**, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.
- c. La revisión que el *INE* hizo a los padrones de las y los militantes de los partidos políticos nacionales en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se circunscribió a verificar **su número mínimo** de afiliadas y afiliados para la conservación de su registro y a vigilar que **no existiese doble afiliación**, a partidos políticos con registro o en formación.

---

<sup>153</sup> Véase <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf>

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

- d. Dicha verificación **no tuvo como propósito revisar que los partidos políticos efectivamente contasen con el documento comprobatorio de la afiliación** de las y los ciudadanos en términos de lo previsto en su normativa interna.

Así, esta autoridad electoral nacional, con la finalidad de dar una solución integral al problema generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación de las personas a los partidos políticos, y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, así como fortalecer el sistema de partidos, estimó necesario implementar, de manera excepcional, un procedimiento para garantizar que, en un breve período, sólo se encuentren inscritas las personas que de manera libre y voluntaria hayan solicitado su afiliación, y respecto de las cuales se cuente con alguno de los documentos que avalen su decisión.

El proceso de actualización se concibió obligatorio y permanente, lo cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

Para alcanzar el objetivo propuesto en dicho acuerdo, se estableció una suspensión temporal en la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores, con las excepciones siguientes:

- Aquellos supuestos en los que se actualizara la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral; o bien,
- Porque se encontrasen en la hipótesis de cumplimiento a una ejecutoria dictada por alguna de las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, previó una serie de actividades y obligaciones para los partidos políticos, que debían ser ejecutadas en el plazo comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, cuyo incumplimiento tendría como efecto anular la suspensión de la resolución de los procedimientos e imponer las sanciones atinentes.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

En este sentido, debe destacarse que durante la vigencia del referido Acuerdo, se procedió a eliminar de los padrones de militantes el registro de todas y cada una de las personas denunciadas en los procedimientos, tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, como de sus portales de *internet* y/o cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse, logrando eliminar el registro de más de nueve millones de personas.

Cabe señalar, que los padrones de afiliados y afiliadas, son bases de datos variables debido a los movimientos de altas y bajas que llevan a cabo todos los días los partidos políticos nacionales; además de ello, el proceso de verificación permanente de que son objeto los padrones, implica que los nuevos registros se compulsen contra el padrón electoral y entre los padrones de los partidos políticos con registro vigente y en proceso de constitución, para determinar si serán registros válidos, sujetos de aclaración o definitivamente descartados.

En suma, el acuerdo INE/CG33/2019, emitido por este Consejo General, tuvo como propósito ser un parteaguas que sentase las bases que permitieran transitar hacia padrones de militantes sólidos y confiables, para superar el alto número de afiliaciones indebidas encontradas antes de su aprobación, visto que, hasta ese momento, la pura imposición de multas no había sido una solución de fondo a la tutela del derecho fundamental de libertad de afiliación, propiciaba el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

En este sentido, el referido acuerdo delineó un régimen transitorio que permitiera a los institutos políticos consolidar sus padrones, a través del agotamiento de los procedimientos siguientes:

1. En cuanto a las afiliaciones recabadas **antes** de la aprobación del acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos debían poner en estado de *reserva* la totalidad de su militancia, con el fin de verificar si contaban en su archivos con la documentación probatoria del consentimiento de los ciudadanos que figuraban como sus militantes.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

2. Atinente a las afiliaciones, refrendos o ratificaciones recabados **después** de la entrada en vigor del acuerdo, los partidos políticos tienen la obligación de conservar el documento, ya sea físico o electrónico, que acredite la voluntad de la persona afiliada de ser integrada como militante del partido político respectivo, de manera que, en un escenario ideal, cada una de las afiliaciones o refrendos recabados a partir del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, estuviera debidamente soportada.
3. Por otro lado, en cuanto a la **depuración** de sus padrones, a partir de la aprobación del acuerdo, los partidos políticos debían examinar sus archivos para determinar respecto de cada uno de sus militantes, si contaban con la documentación que acreditara la legítima afiliación y, en caso de no contar con ella, buscar la ratificación de la militancia de las y los ciudadanos respectivos, a más tardar, el treinta y uno de enero de dos mil veinte y, de no lograrlo, dar de baja a la persona en cuestión; en caso de contar con la documentación respectiva, o bien obtener la ratificación de militancia, debían solicitar a la DEPPP la reversión del estatus de *reserva* a *válido*.
4. Asimismo, se ordenó **suspender la resolución** de los procedimientos ordinarios sancionadores cuya materia consistiera en la presunta indebida afiliación a los partidos políticos, hasta en tanto concluyeran las etapas previstas por el acuerdo, a fin de que este Consejo General pudiera contar con datos que revelaran la conducta observada por los institutos políticos durante y después de la vigencia del acuerdo multicitado, así como la realización de las actividades previstas en el mismo, y tomarlas en consideración al momento de resolver en definitiva el procedimiento respectivo y, en su caso, imponer una sanción proporcional no sólo a la comisión intrínseca de la falta, como hasta entonces, sino además, ponderara las medidas y acciones tomadas por los partidos políticos para resolver el problema subyacente.

#### **CUARTO. ESTUDIO DE FONDO**

Como se ha señalado con antelación, las personas quejas alegaron la violación a su derecho de afiliación libre y voluntaria para tomar parte en los asuntos públicos

de país, así como el uso no autorizado de sus datos personales, en esencia, porque supuestamente fueron inscritas sin su consentimiento al padrón de militantes del *PRI*.

### **1. Excepciones y defensas**

Por su parte, el *PRI* en sus distintas intervenciones procesales, medularmente, señaló en su defensa lo siguiente:

- Que el argumento de las personas denunciantes debe desestimarse porque pretenden hacer valer su pretensión basándose únicamente en su dicho, desconociendo su participación en el *PRI*, sin que ofrezcan medios de prueba eficaz para demostrar lo indebido de la afiliación, motivo por lo cual, los hechos que pretenden hacer valer resultan infundados.
- Que las personas denunciantes fueron dadas de baja de su padrón de afiliados, por lo que actualmente ya no son militantes del *PRI*, dando cumplimiento con ello al Acuerdo INE/CG33/2019.
- Que la afiliación de Nancy Griselda Mendoza Corona se encuentra debidamente justificada con la cédula de afiliación correspondiente.

Como se puede apreciar, los argumentos vertidos por el partido político en defensa de sus intereses, tanto al momento de contestar el emplazamiento, como en la rendición de alegatos, tienen que ver con el fondo de la controversia y no con cuestiones de procedencia de la vía, competencia de esta autoridad electoral nacional, o con la personalidad de los quejosos, por lo que sus argumentos serán analizados al realizar el estudio del caso concreto.

### **2. Materia del procedimiento**

Con base en las posturas expresadas por las partes, la materia del procedimiento en el presente asunto estriba en determinar si el *PRI* conculcó el derecho a la libre afiliación en materia política que corresponde a las personas quejosas, quienes alegaron no haber consentido estar en sus filas, vulnerando lo establecido en los

artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), y u); 341, párrafo 1, inciso a), y 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354 párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*; 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a); 456, párrafo 1, inciso a); de la *LGIPE*; y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), y u), de la *Ley de Partidos*.

### **3. Marco normativo**

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de las y los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

#### **A) Constitución, tratados internacionales y ley**

##### ***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

*Artículo 6°*

...

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

*A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...*

*II. La información que se refiere a la vida privada y **los datos personales será protegida** en los términos y con las excepciones que fijan las leyes.*

...

***Artículo 16.***

...

*Toda persona tiene derecho **a la protección de sus datos personales**, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su*

*oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.*

...

**Artículo 35.** *Son derechos del ciudadano:*

...

**III.** *Asociarse individual y **libremente** para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;*

...

**Artículo 41.**

...

**I.**

...

*Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse **libre** e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.*

En esta medida, se considera que el derecho de asociación en materia político-electoral, como lo ha sostenido la *Sala Superior*, es un **derecho fundamental** consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, el cual propicia el pluralismo político, así como la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático, en el entendido de que sin su existencia, o de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se



**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, se puede concluir que el derecho de asociación en materia político-electoral, es la base de la formación de los partidos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de las y los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos, así como afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, *in fine*, y VI; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

Ahora bien, el ejercicio de la libertad de asociación en materia política, prevista en el artículo 9 de la *Constitución*, está sujeto a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea, por un lado, pacífico; y por otro, que tenga un objeto lícito, mientras que la última, circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos y agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo las y los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**<sup>154</sup>.

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente las y los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente<sup>155</sup>, tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

---

<sup>154</sup> Consultable en la página:  
<http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

<sup>155</sup> Consultable en la página: [https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM\\_1917\\_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf](https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf)

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

En el ámbito internacional, el derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes (de asociarse) para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

En el espacio nacional, no obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa

del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y ocho años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

***“Artículo 23.** Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

***I...***

***II.** Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:*

***1.** Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:*

***a.** En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que **suscriben el documento como manifestación formal de afiliación**, y*

***b.** El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y **firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.**”*

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó de manera expresa lo siguiente:

- Que es derecho de las y los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y **libremente**, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la **afiliación** individual, **libre** y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, **cumplir sus normas de afiliación**, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, **cuando incumplieran con sus obligaciones**, señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hizo más tarde el COFIPE de quince de enero de dos mil ocho y actualmente la *LGIFE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

**B) Lineamientos para la verificación de afiliados**

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del otrora Instituto Federal Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprobaron los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (CG617/2012)*.

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación, la *DEPPP* deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al total preliminar de afiliados, para obtener el número total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los mencionados Lineamientos, consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional contaban o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de las y los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron



**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los afiliados necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cuál, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

### **C) Normativa interna del *PRI***

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del *denunciado*, se hace necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de la misma:

Estatuto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil trece.

**Capítulo V**  
**De los Mecanismos de Afiliación**

*Artículo 54. Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que **libre e individualmente**, y en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación electoral vigente y estos Estatutos, expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos.*

*Artículo 55. La afiliación al Partido se hará **ante la sección en cuya demarcación se encuentre el domicilio del solicitante o ante el comité municipal o delegacional, estatal o nacional correspondiente o en los módulos itinerantes o temporales establecidos para tal fin, así como en Internet**, quienes notificarán al órgano partidista superior para que se incluya en el Registro Partidario, refiriendo al afiliado al seccional de su domicilio, como ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y electorales.*

*Una vez afiliado, el Partido otorgará al ciudadano la credencial y documento que acredite su calidad de miembro.*

*En tratándose de reafiliación de aquéllos que hayan salido del Partido en forma voluntaria o de afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, la Comisión de Justicia Partidaria que corresponda deberá hacer la declaratoria respectiva una vez que el interesado acredite haber cumplido con el proceso de capacitación ideológica.*

*La dirigencia del Partido, en todos sus niveles, mantendrá programas permanentes de afiliación y credencialización.*

**[Énfasis añadido].**

**Código de Justicia Partidaria del PRI<sup>156</sup>**

(...)

---

<sup>156</sup> Aprobado el ocho de agosto de dos mil catorce, vigente en el momento en que ocurrieron los hechos.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

*Artículo 120. Los militantes que renuncien voluntariamente al Partido, deberán hacerlo por escrito dirigido a la Comisión de Justicia Partidaria de la entidad federativa en que radique, solicitando la declaratoria respectiva.*

*Artículo 121. La Comisión de Justicia Estatal o del Distrito Federal según corresponda, sustanciará la solicitud, otorgando un término de diez días hábiles para que sea ratificada o retirada. De no comparecer en dicho plazo, se tendrá por no interpuesto el escrito de solicitud de renuncia.*

*Artículo 122. Los miembros del Partido que soliciten la declaratoria de la pérdida de militancia prevista en el artículo 63 de los Estatutos, deberán cumplir los siguientes requisitos:*

- I. Presentar su solicitud por escrito donde se haga constar nombre y firma del solicitante, nombre y domicilio de la o el militante denunciado, la narración de los hechos que se evidencian relacionados con las hipótesis del citado artículo 63; y*
- II. Acompañar las pruebas con las que pretenda demostrar las imputaciones. En los casos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 63 de los Estatutos, cuando se trate de hechos públicos y notorios, bastará la solicitud que formule la Secretaría Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para que ésta emita la declaratoria de la pérdida de militancia.*

*Todo procedimiento que se instaure para la instrucción de la solicitud de pérdida de militancia se sujetará a las reglas contenidas en el Libro Cuarto, Título Primero de este ordenamiento.*

*Artículo 123. Una vez emitida la declaratoria correspondiente, será notificada al interesado y, para los efectos procedentes, a la Comisión Nacional y a la Secretaría de Organización del Comité Nacional, Directivo o del Distrito Federal respectivo.*

**D) Normativa emitida por este Consejo General**

Ahora bien, resulta importante precisar la determinación que respecto de las afiliaciones y los padrones de militantes de los partidos políticos asumió el órgano

máximo de dirección del *INE*, al emitir el acuerdo registrado con la clave **INE/CG33/2019**, por el cual se aprobó “*la implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales*”, ello derivado de la vinculación que tiene con la materia de la probable infracción que se analiza en el procedimiento al rubro indicado.

### **CONSIDERANDO**

...

#### **10. Justificación del Acuerdo.**

...

*Con la información anterior, tenemos que derivado de la publicación de los padrones de afiliadas y afiliados a los partidos políticos, desde 2014 a la fecha, el INE ha recibido diversas quejas presentadas por la ciudadanía por indebida afiliación en todos y cada uno de los PPN<sup>157</sup>, toda vez que las personas ciudadanas pueden revisar si están o no afiliadas a algún partido político y puede darse el caso de ciudadanas y ciudadanos que, por algún interés particular, se vean afectados al encontrarse registrados como militantes de estos, tal es el caso de las personas interesadas para ser contratadas como Capacitadores Asistentes Electorales o cuando se convoca para ser designados como Consejeras y Consejeros de los Consejos Locales y Distritales del INE, o para integrar los OPLE.*

*Así, se puede evidenciar que, en distintos periodos, todos y cada uno de los partidos políticos que han tenido registro a nivel nacional, han sido sancionados por indebidas afiliaciones.*

***Ello evidencia que los padrones de militantes de los PPN no están lo suficientemente actualizados ni sistematizados con la documentación que acredite la afiliación. Lo cual genera que resulten fundados los casos de indebidas afiliaciones, debido a que los partidos políticos no acreditan en forma fehaciente que las y los ciudadanos efectivamente se afiliaron a determinado partido, o bien, porque los partidos políticos no tramitan las renunciaciones que presentan sus afiliadas y afiliados y, por tanto, no los excluyen del padrón de militantes.***

***Ahora bien, esta autoridad considera que la imposición de sanciones económicas ha sido insuficiente para inhibir la indebida afiliación de***

---

<sup>157</sup> Partidos Políticos Nacionales.

personas a los PPN, ya que ésta continúa presentándose. Incluso, los propios PPN reconocen que es necesario iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación ya que la falta de documentos se debe a diversas circunstancias; es decir, el hecho de que el INE sancione a los PPN no ha servido para solucionar el problema de fondo, que consiste en la falta de rigor en los procedimientos de afiliación y administración de los padrones de militantes de todos los PPN, en tanto que la mayoría de ellos no cuentan con las respectivas cédulas de afiliación.

...

Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede apoyar la constitución de algún nuevo partido) y en aras de proteger el derecho de libre afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y fortalecer el sistema de partidos, se estima necesario aprobar la implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los PPN que garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 12, numeral 3. En el entendido de que el proceso de actualización debe ser obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los Antecedentes I y II.

Con ello, no sólo se protegen y garantizan los derechos político-electorales de las personas, sino se fortalece el sistema de partidos, el cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

...

## ACUERDO

**PRIMERO.** Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

**SEGUNDO.** *Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y pertinentes que permitan implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto.*

**TERCERO.** *Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciadas que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.*

**CUARTO.** *Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el cumplimiento de la última voluntad manifestada.*

**QUINTO.** *Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de la voluntad de la o el afiliado.*

**[Énfasis añadido]**

## **E) Protección de datos personales**

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

## **Conclusiones**

De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de las normas transcritas, se pueden obtener las conclusiones siguientes:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir libre e individualmente si desean o no formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es la o el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político.
- Las y los militantes tienen el derecho de refrendar o renunciar a su militancia.
- La información que sea requerida en términos distintos a los señalados será atendida de acuerdo con las disposiciones del Partido en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Las ciudadanas y ciudadanos de la república tienen el derecho elegir libremente si desean permanecer como afiliados de un determinado partido político o ser dados de baja del mismo, si expresan su voluntad en ese sentido.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- En el Acuerdo INE/CG33/2019, se ordenó instaurar, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación.
- En la referida determinación, se instruyó a los partidos políticos que, de manera inmediata, dieran de baja definitiva de su padrón de militantes, los datos de aquellas personas que, anterior a la emisión del Acuerdo aludido, hayan presentado queja por indebida afiliación o por renuncia que no hubieran tramitado.

**4. Carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido político**

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PRI*, por regla general **debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la**



**información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.**

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el *PRJ*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Lo mismo ocurre con aquellos documentos por medio de los cuales, acrediten haber dado trámite a las solicitudes de desafiliación correspondientes; pues son indispensables para sus procesos de depuración de los padrones de militantes.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Partidos.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están obligados a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, cualquiera que haya sido su objeto, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran expresaron una decisión individual y libre.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación radicado con la clave de expediente **SUP-RAP-107/2017**<sup>158</sup>, donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,<sup>159</sup> el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria<sup>160</sup> y como estándar probatorio,<sup>161</sup> como se ilustra en los párrafos subsecuentes.

En el primer aspecto —*regla probatoria*— implica destacadamente **quién debe aportar los medios de prueba** en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —*estándar probatorio*— es un criterio para concluir **cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho**, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación<sup>162</sup>, ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia **cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los**

---

<sup>158</sup> Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: [http://www.te.gob.mx/Informacion\\_juridiccional/sesion\\_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf](http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf)

<sup>159</sup> Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

<sup>160</sup> Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

<sup>161</sup> Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

<sup>162</sup> Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

**indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.**

*Mutatis mutandis*, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación de algún ciudadano versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado su consentimiento, se deben satisfacer dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “*el que afirma está obligado a probar*” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, conforme al artículo 441 de la *LGPE*, resulta aplicable supletoriamente el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, lo que implica, que la denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliada al partido denunciado.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está afiliada voluntariamente a un partido **es la constancia de inscripción respectiva**, esto es, el documento donde se asienta la expresión de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en la denuncia que dio lugar al presente procedimiento sancionador, las personas quejas alegan que **no dieron su consentimiento** para pertenecer

a un partido, sostienen también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que los denunciantes no están obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, **no son objeto de demostración los hechos negativos**, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, **la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones** y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la *Sala Superior* sostuvo que si el partido denunciado **alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, **la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar** las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación, a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia **no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna**, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

De tal suerte que si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

En este sentido, resulta conveniente apuntar que el denunciado no ofreció medio de prueba alguno para justificar la afiliación de las personas denunciantes, con excepción del original de la cédula de afiliación correspondiente a **Nancy Grisel Mendoza Corona**, asumiendo así las consecuencias de esa falta de prueba.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *Unidad Técnica* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes **podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.***
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes **podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.***
- 3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que **es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

***Énfasis añadido***

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, para destruir la eficacia probatoria de los elementos de prueba aportados por su contraparte, quejoso y denunciado **deberán señalar con precisión los aspectos de la prueba que, a su parecer, constituyen defectos o deficiencias que le restan credibilidad; además, no basta con formular dicha objeción formal, para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario aportar, en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar los extremos de su objeción.**

Al respecto, resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 4/2005<sup>163</sup> de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

---

<sup>163</sup> Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

**DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998).**

*En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.*

**Énfasis añadido**

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.



**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- *DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECCIÓN A LOS.*<sup>164</sup>
- *DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.*<sup>165</sup>
- *DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.*<sup>166</sup>
- *DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)*<sup>167</sup>
- *DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS*<sup>168</sup>
- *DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)*<sup>169</sup>

---

<sup>164</sup> Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, Página 423.

<sup>165</sup> Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de 2009, Página 3128.

<sup>166</sup> Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, marzo de 1993, Página 46.

<sup>167</sup> Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, agosto de 1993, Página 422.

<sup>168</sup> Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, Página 1254.

<sup>169</sup> Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, Página 1454.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.3o.C. J/11<sup>170</sup>, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

**DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS.** *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

**Énfasis añadido**

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia III.1o.C. J/29<sup>171</sup>, sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

**DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).** *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando **se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado***

---

<sup>170</sup> Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, Página 615.

<sup>171</sup> Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Página 680.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

*por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.*

***Énfasis añadido***

En suma, para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado **cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso**, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que el quejoso realizó hechos positivos derivados de su militancia, **no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.**

Lo anterior, atento a que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este *Consejo General*, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la *Sala Superior*—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

En otro orden es importante tener presente que si una persona aduce que se afilió voluntariamente a un partido político, pero posteriormente, como acontecen el caso de Teresa Lovantón Mendoza, refiere que fue su deseo el desafiliarse para no pertenecer más a éste como su militante, y que para ello presentó la correspondiente solicitud de baja o renuncia ante el instituto político, el estándar mínimo probatorio que debe aportar para acreditar su dicho, sería, precisamente presentar esa solicitud o petición de baja, con el correspondiente sello de recepción por parte de la instancia partidista que recogió la solicitud o, en su defecto, con el nombre y firma del funcionario que recibió tal petición; lo anterior, con la finalidad

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

de dar certeza del momento preciso en que el órgano interno del partido tuvo conocimiento de la petición, así como para establecer la temporalidad en que se dio trámite y solución a la petición correspondiente.

Lo anterior tiene sustento en el contenido de la Tesis de Jurisprudencia 16/2011, de rubro ***PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.***

De dicha Tesis, se advierte que las denuncias deben estar sustentadas en hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y **aportar por lo menos un mínimo de material probatorio** a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora o no.

No pasa inadvertido que si bien esta autoridad goza de la facultad investigadora, lo cierto es que ésta se sustenta, en principio, en la existencia de indicios mínimos sobre los cuales pueda ejercer dicha facultad, mismos que deben ser aportados en el escrito de denuncia por parte del quejoso.

Lo anterior, porque se parte de la base de que la finalidad de la facultad investigadora parte de la suficiencia de los elementos aportados con la queja, que permitan establecer, por lo menos en un grado presuntivo, la existencia de una infracción y la probable responsabilidad del o de los sujetos denunciados para estar en condiciones de iniciar el procedimiento y en el momento procesal oportuno, vincularlos al procedimiento.

Es decir, el ejercicio de esta atribución no puede soslayar que, en el particular, corresponde al denunciante aportar datos precisos y elementos de convicción idóneos para acreditar, al menos de manera indiciaria, los hechos denunciados y, en su oportunidad, dar la posibilidad a la parte reo de defenderse sobre las imputaciones que se le formulan, las cuales, en el caso, serían precisamente las

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

relativas a la forma en que dio o no trámite a una solicitud de desafiliación presentada ante sus instancias partidistas.

Por lo expuesto, es indudable que para casos como el que hoy nos ocupa, la carga probatoria, en principio, corresponde al promovente, a fin de demostrar con elementos indiciarios suficientes la comisión de la conducta ilícita, en el caso, la no desafiliación, entendida como la transgresión en su vertiente negativa al derecho de libertad de afiliación que le asiste a cualquier ciudadano en términos de lo previsto en el artículo 41 Constitucional.

Ahora bien, de acreditarse que se presentó ante el instituto político denunciado el escrito de renuncia o desafiliación por parte del denunciante, corresponde al partido político demostrar que dio el trámite oportuno a ese recurso y que desincorporó de sus filias, de manera oportuna a la persona solicitante, para lo cual deberá aportar la constancia de desafiliación o el expediente en donde conste el estatus del trámite realizado al interior del partido con la intención de atender la solicitud de referencia, pues dichas documentales son la prueba directa y que de manera idónea demuestran que sí se atendió la solicitud respectiva.

Lo anterior, debido a la libertad de afiliación en materia política, es un derecho fundamental cuya disponibilidad no puede quedar a cargo de los partidos políticos, sino exclusivamente de los ciudadanos. Considerar lo contrario, implicaría aceptar que está en poder de los institutos políticos decidir el momento en que queda desafiliado un o una militante, en contravención al ejercicio del derecho fundamental de afiliación y su disponibilidad por parte del ciudadano.

Sobre esta última conclusión, debe tenerse en cuenta que la Sala Superior emitió la tesis de jurisprudencia identificada con la clave **9/2019**, de rubro **AFILIACIÓN. LA RENUNCIA A LA MILITANCIA SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN ANTE EL PARTIDO POLÍTICO**<sup>172</sup> en la cual determinó que, cuando algún ciudadano o ciudadana ejerce su derecho de separarse de un partido político, a través de la renuncia, **la dimisión a la militancia surte efectos desde**

---

<sup>172</sup> Consultable en la liga electrónica  
<https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2019&tpoBusqueda=S&sWord=afiliaci%c3%b3n>

el momento de su presentación ante el partido político de que se trate, sin necesidad de que sea aceptada material o formalmente por parte del instituto político.

## **5. Pruebas y acreditación de los hechos**

### **A) Pruebas recabadas por la UTCE**

1. **Correo electrónico** remitido desde la cuenta [patricio.ballados@ine.mx](mailto:patricio.ballados@ine.mx), correspondiente al Director Ejecutivo de Partidos Políticos y Financiamiento de la DEPPP, enviado a la Unidad Técnica el once de marzo de dos mil veinte, a través del cual informó el estatus de las personas quejasas como afiliadas del PRI, la fecha en que fueron integradas al padrón de militantes y aquella en que fueron dadas de baja.

2. **Acta circunstanciada de inspección** a la página electrónica del PRI, practicada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se constató que actualmente las personas quejasas no se encuentran como militantes del denunciado en sus plataformas públicas.

### **B) Pruebas aportadas por el PRI**

3. **Documentales privadas**, consistentes en los oficios PRI/REP-INE/263/2020 y PRI/REP-INE/633/2021, de diez de marzo de dos mil veinte y diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, a través del cual reconoció haber afiliado a las personas quejasas y aportó diversas impresiones de pantalla para demostrar la baja de su padrón de militantes, dando cumplimiento al Acuerdo INE/CG33/2019.

4. **Documental privada** consistente en el **original de la cédula de afiliación de Nancy Grisel Mendoza Corona**, mediante la cual pretende demostrar su licitud.

### **C) Valoración de los medios de prueba**

De los medios de prueba referidos con anterioridad, los listados en los numerales 1 y 2, del inciso A), son pruebas documentales públicas con valor probatorio pleno, al

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

tenor de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafos 1 y 2, de la *LGIPE*; y 22, párrafo 1, fracción I, incisos a) y b); y 27, párrafos 1 y 2, del *Reglamento de Quejas*, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones; no encontrarse objetadas en cuanto a su autenticidad y contenido conforme a las reglas previstas en el artículo 24 del reglamento antes citado; ni estar desvirtuadas por algún elemento agregado a los autos.

Por otro lado, las pruebas identificadas con los numerales 3 y 4, inciso B), en tanto documentales privadas, únicamente harán prueba plena en cuanto a los hechos a los que se refiere cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, con fundamento en lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), y 462, párrafos 1 y 3, de la *LGIPE*; 22, párrafo 1, fracción II; y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*.

En este sentido, del análisis al contenido de los medios de prueba antes citados, de su relación con los hechos afirmados por las partes y la verdad conocida, este Consejo General arriba a las siguientes conclusiones:

**D) Conclusiones**

1. Aun cuando las personas quejosas del presente procedimiento actualmente ya no forman parte del padrón de militantes del *PRI*, **si fueron afiliadas** al mismo, en las fechas señaladas por la *DEPPP* y reconocidas por el mismo denunciado, de manera que la base fáctica del procedimiento que nos ocupa quedó demostrada.
2. El *PRI* **no aportó medios de convicción para demostrar la legal afiliación de las personas quejosas** —salvo de Nancy Grisel Mendoza Corona—, no obstante, la oportunidad procesal que tuvo en diversas ocasiones, lo cual implica que sus excepciones no hayan quedado demostradas.
3. El *PRI* aportó el original de la cédula de afiliación de Nancy Grisel Mendoza Corona, la cual, al no ser objetada por la quejosa, pese a la oportunidad

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

procesal para hacerlo, adquiere eficacia demostrativa para justificar su licitud, esto es, la afiliación de Nancy Grisela Mendoza Corona resulta constitucional y legalmente válida.

4. Aun cuando, Teresa Lovatón Mendoza afirmó haber renunciado al *PRI* en el 2012 y que, a pesar de ello, éste no la dio de baja de su padrón de militantes, no agregó a los autos la solicitud respectiva, de modo que al no cumplir con la carga procesal impuesta, la Unidad Técnica tuvo por no interpuesta la queja de mérito.
5. El *PRI* demostró haber realizado las acciones concretas ordenadas por este Consejo General, a través del acuerdo INE/CG33/2019.

En las relatadas circunstancias, este colegiado puede arribar a la convicción de que las personas quejasas del presente procedimiento, con excepción de Nancy Grisela Mendoza Corona, fueron indebidamente afiliadas al *PRI*, utilizando para ello, sin autorización, sus datos personales.

**6. Caso concreto.**

**A. Afiliaciones ilegales (veintinueve personas quejasas)**

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por las personas quejasas, es preciso subrayar que, de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas, un hecho antijurídico electoral.

Posteriormente, verificar que este hecho sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.



**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral, se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra, su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocida en la legislación de este país, la libertad de la ciudadanía de afiliarse, permanecer afiliada, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno; además del derecho que tiene la ciudadanía de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, identificados con el número de Resolución CG617/2012, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación, es un derecho de las y los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución al denunciado, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar la responsabilidad y sanción respectiva.

Para ello, esta autoridad analizará y ponderará el caudal probatorio que obra en el expediente, a partir del cual es posible arribar al descubrimiento de la verdad de manera directa, en el caso del análisis de las pruebas plenas, o bien, de manera indirecta o circunstancial, al obtener indicios incriminatorios, entendidos estos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de otro conocido.

En este sentido, debe decirse que, en casos como el que nos ocupa, relacionados con la presunta afiliación indebida de una persona a un partido político, corresponde al quejoso demostrar la existencia del hecho en que se basa su inconformidad, es decir, la existencia de la afiliación tachada de ilegal, así como el señalamiento del denunciado, es decir, el partido político que supuestamente realizó la conducta infractora.

Al respecto, conviene destacar que, si el denunciado afirma que las personas quejasas consintieron en ser incorporadas al padrón de militantes respectivo, es decir, que la afiliación objetada fue voluntaria y libre, entonces **deberá demostrar, con los elementos correspondientes, que los denunciantes sí expresaron su voluntad para ser registradas como militantes del instituto político en cuestión.**

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "*el que afirma está obligado a probar*", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la *LGIPE*.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así las cosas, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que, en el caso, la carga de la prueba corresponde al partido político denunciado, pues este afirmó que la afiliación de las personas quejasas a su padrón de militantes fue voluntaria y libre, y no a dichos ciudadanos acreditar que no solicitaron su inclusión en dicho padrón, porque ello implicaría imponerles una carga desmedida para demostrar hechos negativos.

En efecto, como quedo apuntado, la carga probatoria para demostrar la licitud de las afiliaciones que nos ocupan correspondía *PRI* y no a las personas quejasas, como inexactamente refiere para exculparse de la infracción que se le atribuye.

En suma, como se razonó en el apartado anterior, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* y el mismo denunciado, que las personas quejasas se encontraban incluidas en el padrón de militantes del *PRI*, esto es, los hechos consistentes en la afiliación de las citadas ciudadanas, cuya licitud se discute, han quedado plenamente demostrados.

Bajo esta óptica, demostrado el hecho debatido, corresponde verificar si la causa por la cual se alega su ilicitud se encuentra acreditada, es decir, si las personas quejasas solicitaron o no ser incluidas en el padrón de militantes del partido político justiciable, para lo cual era menester autorizar el uso de sus datos personales.

En este sentido, no obstante que el *PRI* afirmó que las afiliaciones cuestionadas fueron voluntarias, lo cierto es que **no demostró con elemento de prueba alguno** —se reitera, con excepción de Nancy Griselda Mendoza Corona—, que tales registros fuesen resultado de la voluntad libre e individual de las personas quejasas; esto es, no evidenció que las referidas ciudadanas y ciudadanos hayan expresado de manera inequívoca su consentimiento para ser afiliadas y menos permitir el uso de sus datos personales para el fin mencionado, a pesar de que tuvo diversas oportunidades procesales en las que no realizó manifestación alguna entorno a la

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

cuestión debatida y pretendió exculparse bajo el argumento de que la carga probatoria correspondía a las personas quejasas y no a dicho Instituto, de manera que, pese a tener la carga de la prueba, el *PRI* no justificó que los denunciante hubiesen consentido integrarse a sus filas.

Bajo este contexto, resulta inconcuso que en el caso concreto, la carga de la prueba correspondía al *PRI*, ya que, en esencia, sostuvo, por un lado, que sí cumplió las normas constitucionales y legales que tutelan el derecho fundamental de afiliación y, por otro, que las personas quejasas manifestaron su libre voluntad de afiliarse a dicho Instituto, de tal manera que asumió así el deber de probar dicho aserto, sin que en la especie lo haya cumplido. De esta suerte, al no estar soportados con medio de prueba alguno, los argumentos defensivos del denunciado, las excepciones opuestas resultan ineficaces.

En este sentido, tal y como quedó expuesto en apartados anteriores, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e incluso, no pertenecer a ninguno.

Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas resulta igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos previsto como garantía constitucional, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, demostrar en todo momento, que cualquier acto que implique la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a éste, deben estar amparados indefectiblemente en el documento que demuestren el consentimiento —para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados— **siendo ineficaz cualquier alegato en el sentido de que tal actividad rebasa la capacidad**

**operativa y de respuesta del denunciado** para cumplir con el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho.

En suma, a partir del material probatorio existente en autos, y de las manifestaciones de las partes, en virtud de que el denunciado no demostró que las personas quejasas, con excepción de Nancy Grisela Mendoza Corona, hayan manifestado libremente su consentimiento para ser incorporada a su padrón de militantes, ni para usar sus datos personales para tal fin, además de que manifestó expresamente no contar con las cédulas de afiliación respectiva, esta autoridad electoral nacional concluye que las infracciones que nos ocupan, quedaron **plenamente acreditadas**.

#### **B. Afiliación legal de Nancy Grisela Mendoza Corona.**

Como se dijo al relatar los antecedentes del presente asunto, al dar contestación al emplazamiento, el *PR* afirmó que la militancia de la citada quejosa estuvo precedida de su voluntad libre e individual, cumpliendo lo establecido en la Constitución, en las normas legales derivadas de ella y en sus ordenamientos internos, sin hacer uso indebido de sus datos personales, tal como se acreditó con el original de la cédula que acompañó a su escrito.

Al respecto, cabe resaltar que la Unidad Técnica dio vista a la quejosa con copia del original de la cédula de afiliación respectiva, concediéndole un plazo perentorio para manifestar lo que a su derecho conviniera, respecto a dicho documento.

Dicho proveído fue notificado personalmente a la inconforme el veintidós de febrero de dos mil veintiuno<sup>173</sup>, sin que haya realizado objeción<sup>174</sup> alguna para demeritar el contenido y eficacia probatoria de la cédula de afiliación referida

En el mismo sentido, cabe recordar que, como se puso de manifiesto en los antecedentes de la resolución que nos ocupa, la Unidad Técnica puso los autos a la vista de las partes mediante acuerdos de veintiocho de julio de dos mil veintiuno

---

<sup>173</sup> Visible a fojas 219 a 221 del expediente

<sup>174</sup> Visible a foja 226 del expediente

y veintidós de marzo de la presente anualidad, sin que, en estas nuevas oportunidades procesales, comparecieran las citadas personas quejas a formular conclusiones tendentes a restar eficacia probatoria a las cédulas aportadas por el denunciado.

Por todo lo antes razonado, atento que el *PRI* aportó prueba idónea y suficiente para acreditar que la afiliación de Nancy Grisel Mendoza Corona fue voluntaria, sin que ésta cuestionara su autenticidad y contenido, se debe concluir que la afiliación que nos ocupa se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.

Con todo lo anterior en mente, este colegiado estima que **no se acreditó la falta denunciada**, puesto que el denunciado, para justificar las afirmaciones en que basó su defensa, ofreció el original de la cédula de afiliación de Nancy Grisel Mendoza Corona, sin que, de manera alguna, fuese objetada por ésta, no obstante, las oportunidades procesales para ello.

## **QUINTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del partido político, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

### **1. Calificación de la falta**

#### **A) Tipo de infracción**

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
La infracción se cometió por una <b>acción</b> del partido político denunciado y el grado de participación fue como autor material del hecho ilícito con pleno dominio del hecho.	La conducta cuestionada fue la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de las personas quejas, por parte del <i>PRI</i> .	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), y u); 44, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso a), 342, párrafo 1, incisos a) y n) y 354, párrafo 1, inciso a), del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la <i>Ley de Partidos</i> .

**B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas.**

En el presente asunto, las disposiciones vulneradas tienden a preservar el derecho de las y los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PRI* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados a las personas quejas —excepto a Nancy Griselda Mendoza Corona—, sin demostrar que obtuvo su consentimiento para incorporarlas, vulnerando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; cuyo contenido se reproduce en los artículos 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e) de la Ley de Partidos.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de las y los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militantes de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el respeto de la prerrogativa señalada, a través de mecanismos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser agremiados.

Por otra parte, como se analizó, el denunciado utilizó los datos personales de las personas quejasas como lo son, el nombre y la clave de elector, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de sus datos personales se constituya como un elemento indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida, circunstancias que deben considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *PRI*.

### **C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada**

La conducta infractora **fue singular**, pues aun cuando se acreditó que el *PRI* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales, incluyendo su normativa estatutaria, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de las personas quejasas, tal circunstancia no implica *per se* un concierto o pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación por parte del instituto político denunciado, quien, como ya se dijo, incluyó en su padrón de militantes a las personas quejasas, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

### **D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción**

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción de la conducta infractora debe valorarse las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

**a) Modo.** En el caso bajo estudio, la irregularidad atribuida al *PRI*, consistió en incluir en su padrón de afiliados a las personas quejasas, sin haber recabado su voluntad para pertenecer a las filas del instituto político citado, inobservando lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *Ley de Partidos*.



**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

**b) Lugar y Tiempo.** En el caso concreto, la afiliación controvertida sucedió en la fecha y lugar que se cita a continuación:

No	Nombre del quejoso	Tiempo	Lugar
1	Alondra Guadalupe Sánchez Chávez	*	Hidalgo
2	Angélica Olguín Martínez	*	
3	Araceli Chávez Galindo	*	
4	Carlos Hernández Trejo	24/05/2013	
5	Carlos Primero Yeso	*	
6	Citlally Hernández Lozano	*	
7	Cristina Martínez Trejo	*	
8	Delia Hernández Acosta	*	
9	Dennis Vaquero Campos	03/09/2013	
10	Dulce Elena Pérez Hinojosa	20/05/2016	
11	Elizabeth Serrano Trejo	*	
12	Enrique Ramírez Escobar	24/02/2015	
13	Félix Rogelio Osorio Ángeles	*	
14	Gerardo Rodríguez Arangure	05/08/2014	
15	Ivonne Vázquez Tepetate	*	
16	Juan José Reséndiz Barrera	*	
17	Lizeth Peña Cruz	30/04/2014	
18	Mara Argelia Chávez Acosta	*	
19	María del Carmen Martínez Castaño	24/05/2013	
20	Mariana Espino Castañón	23/02/2014	
21	Mauricio Israel Rodríguez Nacaspaca	*	
22	Nelly Rodríguez Juárez	02/01/2012	
23	Oralia García Morán	02/01/2014	
24	Raquel Sanpedro Rangel	*	
25	Susana Torres Urbano	02/02/2014	

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

No	Nombre del quejoso	Tiempo	Lugar
26	Teresa Lovatón Mendoza	*	
27	Yazmín García Zúñiga	24/05/2013	
28	Yeimi Yudho González	02/01/2014	
29	Yeni Laura Pérez Castro	*	

\* En términos del acuerdo INE/CG172/2016, la fecha de afiliación considerada para resolver el presente asunto fue el doce de septiembre de 2012

Como puede advertirse de la tabla que antecede, las afiliaciones cuestionadas acontecieron con anterioridad a la aprobación del Acuerdo INE/CG33/2019, cuya finalidad preponderante, consistía en asegurar la precisión y confiabilidad de los padrones de militantes de los partidos políticos de manera que, al no contar con la documentación soporte que demostrará la voluntad de la persona afiliada, los Partidos Políticos Nacionales debían reservar dichas afiliaciones a fin de intentar conseguir el refrendo o ratificación por parte del militante y, de no conseguirlo en los plazos marcados, proceder a dar de baja a los militantes respecto de quienes no contaran con la manifestación de voluntad respectiva, tal como ocurrió en la especie. Circunstancia que resulta relevante para el caso que nos ocupa y será tomada en consideración al momento de seleccionar la sanción que, en su caso, resulte aplicable.

#### **E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)**

Este Consejo General considera que la conducta fue **dolosa**, esencialmente, por las razones que se citan enseguida:

- El *PRI* es un partido político nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

- El *PRI* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de las y los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *Ley de Partidos*.
- El derecho de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *Ley de Partidos*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Aunado a lo anterior, la conducta del *PRI* resulta dolosa porque:

- Las personas quejasas negaron haber consentido su registro o incorporación como militante del *PRI*; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.
- Quedó acreditado que las denunciadas se encontraban inscritas en el padrón de militantes del *PRI*, conforme a lo informado por el denunciado y la *DEPPP*.
- El partido político denunciado no aportó medio de prueba alguna para demostrar que las afiliaciones cuestionadas se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, de manera que estuviera sustentada en la expresión libre y voluntaria de las personas

denunciantes. Contrariamente, manifestó no contar con medio de prueba alguno y pretendió arrojar la carga de la prueba a los citados ciudadanos y ciudadanas.

#### **F) Condiciones externas (contexto fáctico)**

Resulta pertinente precisar que la conducta desplegada por el *PRI* se cometió al afiliar indebidamente a las personas quejasas, sin demostrar el acto volitivo de éstas para ingresar en su padrón de militantes, así como para proporcionar sus datos personales con ese fin.

Lo anterior independientemente que a la fecha de la resolución que nos ocupa, las personas quejasas ya no formen parte del padrón de militantes del denunciado, pues la cuestión a dilucidar consiste en determinar si las personas denunciadas otorgaron o no su consentimiento expreso para ser afiliadas, de modo que la fecha en que hayan sido dadas de baja resulta irrelevante para anular la infracción cuestionada, pues la infracción se actualizó en el momento mismo en que el denunciado las afilió indebidamente y continuó hasta que la dio de baja.

#### **2. Individualización de la sanción.**

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

##### **A) Reincidencia**

##### **Afiliaciones sin reincidencia**

En el caso de las afiliaciones que nos ocupan, con excepción de Dulce Elena Pérez Hinojosa, **no existe reincidencia**, puesto que, de conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la *LGPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado ordenamiento legal, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

En efecto, es un hecho notorio para este órgano colegiado la existencia de diversas resoluciones emitidas por el Consejo General, sobre conductas idénticas a la que nos ocupa, destacándose para los efectos del presente apartado la identificada con la clave INE/CG218/2015, a través de la cual, el veintinueve de abril de dos mil quince, resolvió el procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/MCHA/CG/9/PEF/24/2015, determinando la responsabilidad del hoy denunciado al actualizarse la indebida afiliación que fue analizada en dicho procedimiento, resolución que adquirió definitividad y firmeza, ya que no fue impugnada por el *PRI*.

Con base en lo anterior y tomando en consideración que la afiliación de las personas quejasas, con excepción de Dulce Elena Pérez Hinojosa, acontecieron con anterioridad al dictado de la resolución referida, se estima que **no existe reincidencia**.

**Afiliación con reincidencia**

En el caso de **Dulce Elena Pérez Hinojosa**, la afiliación denunciada ocurrió el **veinte de mayo de dos mil dieciséis**, esto es, con posterioridad al veintinueve de abril de dos mil quince, fecha en que el *PRI* fue sancionado dentro del procedimiento UT/SCG/Q/MCHA/CG/9/PEF/24/2015 —resolución INE/CG218/2015, que no fue recurrida— por infracciones de igual naturaleza. En este sentido, resulta claro que la conducta que hoy se atribuye al denunciado **sí resulta reincidente**, ya que, pese haber sido sancionado por una conducta de igual naturaleza, nuevamente afilió de forma indebida a la citada quejosa, al incorporarla a su padrón de militantes sin su voluntad, lo cual implica una transgresión a la normatividad electoral, que debía observar con mayor cuidado porque ya pesaba una resolución en su contra por hechos similares.

**B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra**

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

En efecto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Bajo este contexto, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de las personas quejasas al *Partido Revolucionario Institucional*, pues se comprobó que éste afilió a los citados denunciantes sin demostrar que medió su voluntad para pertenecer a la lista de agremiados de dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas estriba en garantizar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos mexicanos, con la correlativa obligación de cada partido político, de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de las personas denunciantes, se dispuso indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PRI*.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

- No existió un beneficio por parte del denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- Existe reincidencia por parte del *PRI* respecto de la afiliación de **Dulce Elena Pérez Hinojosa**.

Así, en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente calificar la falta en que incurrió el *PRI* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el denunciado infringió el derecho de libre afiliación de las personas quejasas, lo que constituye una violación a su derecho fundamental de libre afiliación reconocido en la *Constitución*.

**C) Sanción a imponer**

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que han quedado acreditadas la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es necesario aplicar una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda;



**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, **entre otras cuestiones**, la gravedad de la conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Desde esta óptica, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz de lo establecido en el artículo 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, con el criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis **XLVI/2002**, de rubro **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, **éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al *quántum* de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.**

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) está compelido a ponderar, **casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que** converjan en un caso determinado, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Esto es, el *INE*, en estricto acatamiento del principio de legalidad, **está obligado** al análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la *LGIPE*, en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a soslayar el vocablo “entre otras”, inserto en artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, y la tesis antes señalada y, consecuentemente, no administrar una justicia **completa**, contrario a lo previsto por la Norma Fundamental.

Lo anterior es relevante porque, si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en reiteradas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación, como el que ha quedado demostrado a cargo del *PRI*, se justifica la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, el cual se encuentra replicado en el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en **una multa** por cada una de las personas en cuyo agravio se cometió la infracción.

En efecto, es preciso no perder de vista que, como se refirió en el Considerando denominado “Efectos del acuerdo del Consejo General **INE/CG33/2019**”, tanto esta máxima autoridad electoral administrativa como los propios partidos políticos, entre ellos el *PRI*, advirtieron que a la violación del derecho de libertad de afiliación que dio lugar a los precedentes a que se refiere el párrafo anterior, subyace un problema de mayor extensión, reconociendo la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Ante tales circunstancias, y de conformidad con las previsiones establecidas en el citado Acuerdo, se implementó un procedimiento extraordinario de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales, para garantizar, en un breve período, que solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de quienes, además, los institutos políticos cuenten con el soporte documental atinente a la militancia.

Lo anterior, obedece justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la violación al derecho fundamental ciudadano a decidir si desea o no militar en una fuerza política, además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en acatamiento al principio de certeza electoral.

Por estas razones, en dicha determinación, específicamente en el punto de acuerdo TERCERO, se ordenó lo siguiente:

**TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciaciones que no hubieran tramitado.** En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.

**[Énfasis añadido]**

Además, es de suma importancia destacar que el citado Acuerdo, implicó para todos los partidos políticos nacionales, aparte de la baja de los ciudadanos hoy quejosos de sus padrones de afiliados, una serie de cargas y obligaciones de carácter general, tendentes a depurar sus listados de militantes y, a la par, inhibir los

registros de afiliaciones que no encuentren respaldo documental sobre la plena voluntad y consentimiento de cada ciudadano.

En sintonía con lo expuesto, en ese acuerdo se estableció que la realización de las actividades ordenadas a los partidos políticos, podría tomarse en cuenta como atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar acreditada la infracción en los respectivos procedimientos sancionadores y de acuerdo con la valoración y circunstancias particulares de cada expediente.

En este contexto, de conformidad con el *Informe Final sobre el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales (INE/CG33/2019)*<sup>175</sup>, mediante el cual, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del *INE*, informó al *Consejo General* que **los siete partidos políticos, -entre ellos el PRI- durante la vigencia del citado Acuerdo, presentaron los informes respectivos sobre el avance en el agotamiento de las etapas previstas en el acuerdo INE/CG33/2019.**

En este tenor, a partir de la información recabada por esta autoridad relacionada con la baja de los ciudadanos quejosos de sus padrones de militantes, entre ellos los quejosos del presente procedimiento, y de las acciones emprendidas en acatamiento al mencionado acuerdo, en términos de lo informado por la *DEPPP*, se puede concluir que el hoy denunciado atendió el problema de fondo que subyacía al tema de afiliaciones indebidas, al depurar su padrón de militantes, garantizando con ello el derecho de los ciudadanos de libertad de afiliación política; lo anterior, en congruencia con las razones esenciales previstas en la Tesis de Jurisprudencia **VI/2019**, emitida por el Tribunal Electoral de rubro **MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. LA AUTORIDAD RESOLUTORA PUEDE DICTARLAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.**

En efecto, en observancia al citado Acuerdo, la *Unidad Técnica* instruyó al *PRI* para que procediera a eliminar de su padrón de militantes el registro de las personas denunciadas en este procedimiento administrativo sancionador; lo anterior, para el

---

<sup>175</sup> Consultable en la página de internet del *INE*, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/113621>

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

supuesto de que aún se encontraran inscritos en el mismo, tanto en el *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos* de la *DEPPP*, así como de su portal de internet **y/o cualquier otra base pública** en que pudieran encontrarse, debiendo aportar los medios de prueba que acreditaran sus afirmaciones.

Al respecto, debe mencionarse que la instrucción dada al citado instituto político fue oportunamente cumplimentada y corroborada por la *DEPPP*, por lo que hace al *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos*, como por la *UTCE*, respecto del portal de internet del partido político referido.

Con base en ello, esta autoridad destaca las conclusiones siguientes:

- Ante la problemática advertida por esta autoridad electoral nacional, respecto a la falta de actualización y depuración de la documentación soporte que avale las afiliaciones ciudadanas a los partidos políticos, este *Consejo General* emitió el Acuerdo **INE/CG33/2019**, por el cual instauró, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos, las y los ciudadanos quienes, en realidad, hayan solicitado su afiliación.
- En relación con lo anterior, el *PRI* atendió el problema subyacente a las indebidas afiliaciones, eliminando de su padrón de militantes el registro del quejoso, tanto en el *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos*, como de su portal de internet, así como la realización de aquellas actividades ordenadas por este Consejo General a través del acuerdo INE/CG33/2019, a que se ha hecho referencia anteriormente.

Por ello, esta autoridad considera que previo a determinar la sanción que corresponde al *PRI* por la comisión de la infracción que ha sido materia de estudio en la presente Resolución, es trascendente valorar también las acciones realizadas por el responsable **con posterioridad a la comisión de la infracción**, con el objeto de acatar cabalmente el mandato constitucional de administrar justicia de manera completa, inserto en el artículo 17 de la *Constitución*.

En efecto, como antes quedó dicho, al aplicar una norma jurídica abstracta a un caso concreto, el juzgador está obligado a considerar todas las circunstancias que concurren en el particular, inclusive la conducta observada por el responsable con posterioridad a la comisión del ilícito, respecto a lo cual, resulta orientadora la jurisprudencia que se cita enseguida:

**INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO JUDICIAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA AUTORIDAD RESPONSABLE.**<sup>176</sup> *Acorde con el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad judicial es la encargada de imponer las penas, al ser la que valora las pruebas para acreditar el delito y la responsabilidad penal del acusado, quien mediante el ejercicio de la intermediación debe analizar los elementos descritos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que se refieren a las condiciones de realización del delito, las calidades de los sujetos activo y pasivo, la forma de intervención del sentenciado, la situación socioeconómica y cultural de éste, **su comportamiento posterior al evento delictivo**, así como las circunstancias en que se encontraba en su realización; **todas esas condiciones deben percibirse por el juzgador de instancia, al ser quien tiene contacto directo con el desarrollo del proceso penal** y no por el tribunal constitucional, el cual tiene como función salvaguardar derechos humanos y no verificar cuestiones de legalidad, en virtud de que su marco normativo para el ejercicio de sus facultades lo constituyen la Carta Magna, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito no debe sustituirse en la autoridad responsable, toda vez que no podría aplicar directamente los preceptos de la codificación penal indicada al no ser una tercera instancia, máxime que el tema del grado de culpabilidad del sentenciado y el cuántum de las penas no implica que la responsable se hubiese apartado de la razón y la sana lógica, no es una infracción a la interpretación de la ley, no es una omisión de valoración de la prueba y no consiste en la apreciación errónea de los hechos.*

---

<sup>176</sup> Consultable en la página

<https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2014661&Clase=DetalleTesisBL>

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Del modo anterior, este *Consejo General* considera que la actitud adoptada por el *PRI*, respecto de las personas cuyo caso se analiza, si bien no puede excluirlo de la responsabilidad en que incurrió, puesto que la infracción quedaría impune, debe ser ponderada para fines de la individualización de la sanción que le corresponda, aproximando la sanción al extremo inferior del rango de las previstas por la *LGIPE*, toda vez que el proceder del *PRI* redundaría en la vigencia del orden jurídico; en la protección al derecho de libre afiliación de los ciudadanos tutelada, incluso, por los propios partidos políticos —como el denunciado—; y la prevalencia del Estado de Derecho.

Lo anterior es así, ya que, de conformidad con lo informado por la *DEPPP*, se advirtió que durante la vigencia del acuerdo general INE/CG33/2019, el *PRI* informó sobre los avances y la culminación de las tareas encomendadas mediante el citado acuerdo, lo que revela su actitud de atender la problemática fundamental, con la finalidad de depurar su padrón de afiliados y salvaguardar el derecho de libertad de afiliación en materia política.

Aunado a ello, de conformidad con el *Informe Final sobre el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales (INE/CG33/2019)*, aprobado por este *Consejo General*, el veintiuno de febrero de dos mil veinte, específicamente, con los incisos d) y e) del apartado denominado “VIII. CONCLUSIONES GENERALES”, es posible destacar que:

1. Al treinta y uno de enero de dos mil veinte, los partidos políticos nacionales ya no contaban con registros en el estatus “en reserva”.
2. Los partidos políticos nacionales en acatamiento del Acuerdo INE/CG33/2019, instrumentaron las acciones necesarias para publicar en sus páginas de Internet, los padrones de personas afiliadas con la misma información contenida en la página del Instituto.

Lo anterior, bajo el interés de que los padrones de personas militantes se integren exclusivamente con aquellas ciudadanas y ciudadanos que así lo decidan y las

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

personas puedan contar con fuentes de información ciertas y accesibles para conocer con toda veracidad si se encuentran afiliadas a un partido político.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 21 Constitucional, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a juicio de este órgano electoral **se justifica la reducción de la sanción que previamente había impuesto este órgano superior de dirección, por una de menor entidad, establecida en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la LGIPE, consistente en una amonestación pública**, pues tal medida, permitiría lograr la finalidad del acuerdo multicitado, además que con ella se incentiva a los partidos políticos a colaborar con esta autoridad en la supervisión, actualización y consolidación de un registro de su militancia partidaria, certero y confiable.

Con base en lo expuesto en el presente apartado, y en razón de que la sanción que se impone consiste en una **amonestación pública**, resulta innecesario el análisis de las condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en sus actividades.

**D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción**

Se estima que aun cuando la infracción cometida por el *PRI* causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no reportó un beneficio o lucro para el infractor, o en daño o perjuicio económico causado a las personas quejasas, de manera que no es pertinente realizar una cuantificación de la incidencia monetaria que pudo haber tenido el ilícito cuyo estudio nos ocupa.

**SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN**

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile, tratándose de partidos políticos, a través del **recurso de apelación** previsto en el precepto 42 de la *Ley de Medios*, así como del **juicio para la protección de los datos personales de los ciudadanos** previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento, cuando se impugne por ciudadanos.



**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Por lo expuesto y fundado, se

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** No se acreditó la infracción consistente en la indebida afiliación y el uso de datos personales de Nancy Grisel Mendoza Corona, en términos de lo razonado en el Considerando **CUARTO** de esta resolución.

**SEGUNDO.** Se acreditó la infracción consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de Iondra Guadalupe Sánchez Chávez, Angélica Olguín Martínez, Araceli Chávez Galindo, Carlos Hernández Trejo, Carlos Primero Yeso, Citlally Hernández Lozano, Cristina Martínez Trejo, Delia Hernández Acosta, Dennis Vaquero Campos, Dulce Elena Pérez Hinojosa, Elizabeth Serrano Trejo, Enrique Ramírez Escobar, Felix Rogelio Osorio Ángeles, Gerardo Rodríguez Arangure, Ivonne Vázquez Tepetate, Juan José Reséndiz Barrera, Lizeth Peña Cruz, Mara Argelia Chávez Acosta, María del Carmen Martínez Castaño, Mariana Espino Castañon, Mauricio Israel Rodríguez Nacaspaca, Nelly Rodríguez Juárez, Oralía García Morán, Raquel Sanpedro Rangel, Susana Torres Urbano, Teresa Lovatón Mendoza, Yazmín García Zúñiga, Yeimi Yudho González y Yeni Laura Pérez Castro, por las razones expuestas en el Considerando **CUARTO** de esta resolución.

**TERCERO.** Se impone una **amonestación pública** al *PRI*, en los términos del Considerando **QUINTO** de la presente resolución, por las infracciones cometidas en contra de las personas quejasas.

**CUARTO.** La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios; así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en términos de lo establecido en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

**QUINTO.** Publíquese la presente determinación en el Diario Oficial de la Federación, a fin de hacer efectiva la sanción impuesta al *PRI*, una vez que la misma haya causado estado.

**Notifíquese personalmente** a las personas quejas en el presente asunto, así como al *PRI*, por conducto de su representante propietario ante este Consejo General **en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral**; y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de octubre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al tipo de sanción, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/AGSC/JD02/HGO/46/2020**

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reincidencia, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de la Consejera y los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL  
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA**